

[BORIS Miranda • DANIEL Agramont]  
EDITORES

[ÁLVARO Irusta • ROBERTO Charca • ADRIANA Gutiérrez • NELFI Fernández  
BORIS Miranda • LUIS FERNANDO Cantoral • ZULMA Camacho]

EL ROSTRO DE  
LA  
(IN)SEGURIDAD  
EN BOLIVIA

[Siete crónicas sobre circuitos delictivos]





# **EL ROSTRO DE LA (IN)SEGURIDAD EN BOLIVIA**

**Siete crónicas sobre circuitos delictivos**

BORIS Miranda y DANIEL Agramont  
Editores

**Friedrich Ebert Stiftung  
Fundación para el Periodismo**

## **EL ROSTRO DE LA (IN)SEGURIDAD EN BOLIVIA**

Siete crónicas sobre circuitos delictivos

Primera edición: junio 2015

- © Friedrich Ebert Stiftung (FES)
- © Fundación para el Periodismo

Editores:

Boris Miranda y Daniel Agramont

Autores:

Álvaro Irusta  
Roberto Charca  
Adriana Gutiérrez Ampuero  
Nelfi Fernández Reyes  
Boris Miranda  
Luis Fernando Cantoral  
Zulma Camacho Guzmán

Cuidado de edición:

Nadia Gutiérrez

Las opiniones expresadas en esta publicación no representan necesariamente las de la Fundación Friedrich Ebert o de la Fundación para el Periodismo.

Toda solicitud de autorización para reproducir total o parcialmente esta publicación debe dirigirse a:

### **Friedrich Ebert Stiftung**

Av. Hernando Siles No 5998, esq. calle 14, Obrajes

Tel.: (591-2-) 2750005

[info@fes-bol.org](mailto:info@fes-bol.org)

La Paz, Bolivia

Depósito legal: 4-1-2150-15

ISBN: 978-99974-50-20-3

Diagramación e impresión:

Alquimia 706 14146

La Paz, Bolivia, junio de 2015

## CONTENIDO

<b>PRESENTACIÓN</b> .....	5
<b>INTRODUCCIÓN</b> .....	7
Álvaro Irusta <b>San Pedro, Palmasola y Chonchocoro</b> <b>EN LAS ENTRAÑAS DE TRES CÁRCELES DE BOLIVIA</b> .....	13
Roberto Charca <b>CÁRTELES MEXICANOS DE TERCERA GENERACIÓN OPERAN EN BOLIVIA</b> .....	23
Adriana Gutiérrez Ampuero <b>Iruni, fuera de los mapas</b> <b>EL NARCOPUEBLO</b> .....	29
Nelfi Fernández Reyes <b>Los diferentes rostros de una realidad</b> <b>ICHILO, VÍCTIMA Y CÓMPLICE DEL NARCOTRÁFICO</b> .....	37
Boris Miranda <b>Delitos sin sanción</b> <b>BREVE GEOGRAFÍA DE LA TRATA EN BOLIVIA</b> .....	49
Luis Fernando Cantoral <b>Tráfico que continúa</b> <b>EL PATRIMONIO DEL PAÍS SALE POR LAS FRONTERAS</b> .....	59
Zulma Camacho Guzmán <b>La volcada del Tancara, el Ch'ila Tigre, el Lucifer y el Pilas</b> <b>MUERTE EN EL ABRA</b> .....	75



## PRESENTACIÓN

En los últimos años, la seguridad en el país se ha convertido en uno de los temas que mayor atención pública ha concitado. No solo existen estadísticas que muestran que la inseguridad ciudadana es la principal preocupación para los bolivianos, sino que además sucedieron hechos poco comunes para la realidad del país. Temas como secuestro y trata de personas, así como crimen organizado y narcotráfico, acaparan cada vez más los titulares de la prensa nacional, mostrando sin embargo una importante carencia: la falta de cifras y datos concretos y la escasa profundización en torno a los hechos noticiosos.

Ante esta situación, la Fundación Friedrich Ebert (FES) y la Fundación para el Periodismo (FPP) asumieron el reto de mejorar la comprensión y las capacidades investigativas respecto a la seguridad desde una agenda amplia. La meta que se persiguió fue promover periodismo de investigación, que profundice con seriedad los hechos, y que no se quede solamente en reportes a partir de la información disponible. Si bien estos talleres fueron la continuación de una ya larga cooperación entre ambas instituciones, el tema de seguridad fue una nueva incursión, que buscó aprovechar la experiencia de la Fundación Friedrich Ebert en el tema.

La presente publicación es el resultado de los talleres de reflexión y entrenamiento que tuvieron lugar en 2014 bajo la guía del reconocido experto y periodista en temas de seguridad y crimen organizado Jeremy McDermott. Dada la multidimensionalidad del tema, los talleres buscaron, en primer lugar, mostrar que el periodismo de investigación en temas de crimen y delito es una rama con características únicas, especialmente en lo que a la seguridad del periodista se refiere. Posteriormente, se trabajó ampliamente en mejorar las capacidades investigativas, tomando en cuenta que la principal característica de esta área es la falta de información y confidencialidad.

Agradecemos a los siete periodistas que, a partir de lo aprendido en los talleres, realizaron investigaciones sobre diferentes hechos relativos a la (in)seguridad en

Bolivia, y que nos proveen de información muy valiosa para una mejor comprensión de la realidad nacional actual. Agradecemos especialmente a Boris Miranda, quien acompañó todo el proceso posterior a la capacitación.

La Paz, junio de 2015

*Anja Dargatz*  
Directora FES Bolivia

*Renán Estensoro*  
Director Fundación para el Periodismo

## INTRODUCCIÓN

Los circuitos delictivos y el crimen organizado no están en ninguna parte y a la vez pueden estar en todas. Desde un pueblo que no aparece en los mapas en mitad de la frontera entre Bolivia con Chile hasta en los pabellones más insospechados de las cárceles bolivianas. Pueden operar a través de emisarios que van y vienen de México y Colombia o asentarse en poblaciones enteras como Ichilo. Su presencia es difícil de percibir porque sus estructuras son flexibles y versátiles. Pueden articularse a través de redes internacionales de tráfico de patrimonio cultural o establecer rutas estables de trata de personas desde áreas rurales a núcleos urbanos fuera del país.

Se puede decir con bastante certidumbre que Bolivia se encuentra atrapada por las nuevas dinámicas transnacionales del crimen organizado internacional y cuenta con circuitos delictivos propios. La apertura de fronteras, las nuevas tecnologías, la represión exacerbada en ciertos países y la masiva circulación de capitales, entre otros aspectos, han convertido a la lucha contra estos males en un asunto muy complejo de resolver. Los siete trabajos de investigación que vienen a continuación, rigurosos y bien documentados, dan cuenta de esta nueva realidad, y de cómo Bolivia está condicionada por factores ajenos a su soberanía en la lucha contra lo que llamamos crimen organizado internacional y las bandas criminales emergentes (bacrim).

El presente libro es producto del taller de “Periodismo de investigación para temas de seguridad”, que contó con Jeremy McDermott como capacitador. McDermott es jefe de investigación para Colombia y América del Sur del portal en español Insight Crime, un sitio web de noticias especializadas en temas referidos a crimen organizado y seguridad. El curso se realizó los días 28, 29 y 30 de mayo de 2014 y fue organizado por el Programa de Cooperación en Seguridad Regional de la Fundación Friedrich Ebert (FES) junto a la Fundación para el Periodismo (FPP). Los periodistas participantes del curso son los autores de las piezas periodísticas que componen la presente obra, editada por Daniel Agramont, coordinador del Proyecto de Seguridad Regional de la FES, y Boris Miranda, periodista.

Sin embargo, los verdaderos responsables del libro que ponemos a su disposición son los autores de las crónicas: Zulma Camacho, Luis Fernando Cantoral, Roberto Charca, Nelfi Fernández, Adriana Gutiérrez y Álvaro Irusta. Ellos plantearon temas de investigación después de recibir la capacitación de McDermott en áreas como el narcotráfico, la trata de personas, el tráfico de recursos naturales y animales o secuestro, además de debatir aspectos referidos al planteamiento de una investigación y la geopolítica regional del crimen organizado.

McDermott, vale la pena comentarlo, tiene 15 años de experiencia en la presentación de informes de todas partes de América Latina. Él es un exoficial del ejército británico, que estuvo en servicio activo en Irlanda del Norte y Bosnia. Al retirarse de aquella fuerza militar se convirtió en corresponsal de guerra, y cubrió los Balcanes, con sede en Bosnia; luego se trasladó a Beirut a trabajar en Oriente Medio, y, finalmente, se asentó en Colombia desde donde viaja por América Latina. Antes de dirigir al equipo en español de Insight Crime, trabajó en Colombia como corresponsal de la BBC, también fue corresponsal del Daily Telegraph para América Latina. Además, tiene una maestría de la Universidad de Edimburgo.

El resultado del taller son siete crónicas en profundidad y con gran despliegue que siguen el rastro de las (inevitables) huellas que deja la criminalidad en Bolivia. Pisadas profundas como las que se encontraron en la localidad de Iruni; casi imperceptibles como las que dejan los tratantes en Guayaramerín y Riberalta; o las marcas frescas del poder del narcotráfico en varias cárceles bolivianas.

La crónica de Álvaro Irusta expone esta situación a través de un relato detallado donde varias voces confluyen para dejar testimonio de esta realidad. En los penales bolivianos no solo se consumen sustancias controladas, también se comercializan hacia el exterior en pequeñas y grandes cantidades. Existen, en centros penitenciarios como San Pedro de La Paz, sistemas de tráfico y venta de cocaína con distribuidores fuera del penal que coordinan con los reclusos involucrados en el negocio. En el panóptico, el clorhidrato es “cortado” para duplicar su peso (le agregan estuco). Irusta añade que son menores de edad los que sacan a las calles el polvo en sobres.

Roberto Charca aborda una problemática similar, pero la enfoca en la presencia de operadores del narcotráfico internacional dentro del país, en concreto sobre el trabajo de emisarios de los cárteles mexicanos que aterrizaron en suelo boliviano para gerenciar la producción de cocaína que después llevan a la frontera con Estados Unidos. Los operadores que se trasladaron hasta las llanuras bolivianas aprovechan los precios favorables en el proceso de la producción y las amplias zonas sin mucho control policial donde están instalados sus laboratorios. Es muy difícil que un “capo” del narco visite las “cocinas”, pero sí mandan a sus “embajadores” para verificar

la calidad y las condiciones de la preparación de la droga. La crónica muestra de trasfondo cómo Bolivia queda condicionada por la geopolítica regional. Los proveedores originales de los mexicanos (que incluso antes fueron sus “jefes”) eran los colombianos, sin embargo la violencia y transformación de las organizaciones en los valles de Colombia provocó que desde ambos países apunten a Bolivia para iniciar operaciones más grandes. En el siglo pasado, Bolivia tenía un papel más significativo como proveedor de materia prima (hoja de coca) y pasta base.

Dos caras opuestas de una misma moneda son los trabajos de Adriana Gutiérrez y Nelfi Fernández. La primera relata un viaje a una población en mitad del Altiplano “que no aparece ni en los mapas”, mientras la segunda cuenta las cotidianidades de una localidad entre ríos y selvas de la que (casi) todos han escuchado hablar. Ambas regiones tienen una característica común, la presencia permanente y casi omnimoda del narcotráfico.

Gutiérrez, junto a un camarógrafo, viajó hasta Iruni, una localidad que en septiembre de 2013 fue bautizada como el “narcopueblo”. Ubicada en las alturas de la provincia Sajama, a pocos kilómetros de la frontera con Chile, Iruni es un caserío sin servicios básicos donde casi a diario circulaban (o circulan) camionetas 4x4 que trasladan misteriosos paquetes. A pesar de la intervención de la fuerza antidroga, la crónica apunta a que no hay indicios de que el narcotráfico haya dejado de operar en la zona. Y lo que es peor, la periodista cuenta que en toda la región existe un acuerdo tácito o explícito entre los pobladores para no hablar sobre las actividades que el crimen organizado realiza. El denominado “pacto de silencio” apenas pudo romperse con algunas personas que dieron testimonio de las actividades y la presencia de súbditos extranjeros que frecuentan el lugar. Por Iruni no solo operan traficantes de drogas, también circulan autos sin papeles que ingresan a territorio boliviano desde Chile. El reportaje revela, además, que los patrullajes militares y policiales son muy escasos y que los uniformados asignados al control de la zona permanecen la mayoría del tiempo dentro de su cuartel.

Nelfi Fernández pudo ingresar en la provincia Ichilo, la selvática región donde los narcos operan hace décadas y que en cierto momento un ministro de Gobierno la calificó como “la capital del narcotráfico” en Bolivia. La violencia que la presencia de los traficantes genera y las formas en las que los pobladores de toda la región pueden ser reclutados o incorporados a actividades secundarias son abordadas en la crónica de Fernández. La magnitud del movimiento de droga en la región es un problema que tanto autoridades locales como nacionales reconocen en el trabajo titulado “Ichilo, víctima y cómplice del narcotráfico”. Dentro del trabajo se destaca una entrevista con un exhombre del narco que revela detalles desconocidos del funcionamiento de las organizaciones en el lugar.

La trata de personas disputa con el narcotráfico y la venta ilegal de armas los primeros lugares en los negocios ilícitos más lucrativos en el mundo. Y como los otros dos, ha logrado abrir territorios y establecer dinámicas propias en Bolivia. Una “breve geografía” de los corredores que establecieron los tratantes y secuestradores se encuentra en este libro, con la firma de Boris Miranda. Se trata de una crónica que articula algunas de las rutas más frecuentes a través de las cuales bandas criminales trasladan personas dentro del territorio boliviano y también fuera de las fronteras nacionales.

No tan lejos de los fenómenos mencionados en el párrafo anterior, en Bolivia también existe tráfico de patrimonio cultural. Luis Fernando Cantoral apunta bien que este delito está en el tercer lugar entre las economías ilícitas más rentables en el mundo. En primer lugar se encuentra la comercialización de drogas y en segundo el movimiento de armas (sin embargo hay otros estudios que apuntan que la trata de personas es la segunda economía perversa que más recursos genera después del narcotráfico). Con datos de fuente primaria, la investigación resalta información preocupante que ha sido poco tomada en cuenta durante las últimas cinco décadas. De 1964 a agosto de 2014 ocurrieron 316 robos a centros eclesiásticos con una pérdida total de 2.053 piezas. En 1999 se registró la mayor cantidad de robos, 20 en total, con la sustracción de 83 piezas. Si bien en 2007 ocurrieron solo 8 robos, fue el año en que se sustrajeron la mayor cantidad de piezas hasta el momento, 208.

Zulma Camacho, por su parte, realiza una radiografía de la vida en el penal cochabambino de El Abra a partir de la balacera del año 2014 que rompió con el débil equilibrio de fuerzas que existía en esa cárcel. Cuatro personas fallecieron por aquel incidente y 11 resultaron heridas. Sin embargo, más allá de las cifras y los lamentables decesos, la crónica revela cómo era controlado el centro de reclusión por parte de criminales considerados “pesados” y cómo las armas circulaban libremente entre los reclusos y las familias que los acompañan. Todo esto en un ambiente de peleas entre los representantes de los reclusos donde también había niños expuestos a los peligros de la vida dentro de una cárcel.

Los siete trabajos dan cuenta de los nexos y acuerdos de los circuitos delictivos bolivianos con las “bacrim” que se multiplican en toda la región. Alcances que están mucho más allá de las fronteras nacionales y que penetran en lugares bastante fuera del control de los cuerpos de seguridad del Estado Plurinacional. Sin embargo, es importante anotar que, a pesar de dar cuenta de acciones de ciudadanos extranjeros dentro del país, ninguna de las crónicas cae en el simplismo de responsabilizar de todo a las bandas internacionales o en el peligroso vicio de alentar reacciones xenófobas. Todo lo contrario. Los trabajos tienen la virtud de dimensionar la complejidad de la problemática al explicar la forma en la que el crimen organizado se ha articulado en la región. El libro aspira, de esta manera, a aportar al debate sobre las diversas facetas

que tienen las economías perversas que coexisten en el país. Las realidades que aquí se cuentan, sin magnificaciones innecesarias, esperan ser una aproximación más que nos permita comprender el peligro al que están expuestos todos los eslabones de nuestra sociedad.

*Boris Miranda*  
Periodista

*Daniel Agramont*  
Coordinador del Proyecto de  
Seguridad Regional



## San Pedro, Palmasola y Chonchocoro EN LAS ENTRAÑAS DE TRES CÁRCELES DE BOLIVIA

Las cárceles de Bolivia presentan problemas y necesidades similares, pero también historias que se repiten, con distintos nombres, rostros, edades y contextos. Todo lleva, una y otra vez, en uno y otro lugar, a lo mismo. La urgencia de encarar una realidad que hace tiempo ha dejado de estar solo dentro de las paredes de los centros penitenciarios.

ÁLVARO Irusta  
alvaroirusta@gmail.com

Es periodista de seguridad y temas especiales; trabajó en empresas televisivas. En los años 2011 y 2012 recibió menciones de honor a nivel nacional y en 2013 ganó el Premio Nacional en Documentación de Investigación Periodística de Bolivia. Los testimonios de este reportaje se recogieron para formato televisivo el año 2013. El periodista vivió 48 horas en cada cárcel, "comiendo lo que comen, durmiendo donde duermen" los reclusos.



## San Pedro, tierra de nadie

Caminado por los pasillos y por los callejones de la cárcel de San Pedro en La Paz, algo llama la atención. Las cámaras de televisión con luces prendidas incomodan a los reclusos. Unos deciden ocultar sus rostros mientras otros van en busca de documentos para demostrar su verdad sobre su encierro.

### Las rutas de la droga y el alcohol

“No te voy a mentir, no voy a tapar el sol con un dedo, en la cárcel hay droga. Es difícil controlar”.

Como si fuera una confesión, el director de la penitenciaría de San Pedro, coronel de la policía Juan Carlos Coritza, cuenta que todo control para evitar el ingreso de drogas y alcohol al interior del penal es insuficiente. Relata que los reclusos se dan modos para obtener las “ilegalidades” que adentro cuestan cinco veces más que afuera.

Un litro de singani a granel cuesta 50 bolivianos y un litro de whisky llega a los 500 bolivianos. La droga se vende al raleo, entre tres a cinco bolivianos por un paquete de pasta base de cocaína. Puedes comprar hasta 150 pesos de droga como si nada malo hubiese en ello. Son grupos organizados que distribuyen todo en secciones específicas del penal, en lugares poco controlados. Todo se vuelve más fácil porque la Policía no ingresa dentro del penal. El control es externo.

Para los que tienen poco dinero también existen otras formas de obtener el alcohol. Dentro de las celdas es común ver baldes repletos de chicha de arroz o de zanahoria siendo macerada. Así se dan modos para vender lo que producen dentro de la cárcel.

Andrés (nombre ficticio) decide hablar, no sin antes cubrir su rostro y pedir que no filmen su cara. Tiene miedo a represalias. Cuenta que por las noches, en el callejón principal de la cárcel, es más fácil comprar la “papa” o la “mota”, como ellos llaman a la cocaína y a la marihuana. Relata que muchas veces meten droga al penal a través de los muros, con cuerdas y con policías pagados. Una vez adentro, un kilo de cocaína se puede convertir en dos porque la combinan con estuco. Así obtienen más ganancia. El siguiente paso es sacar la droga “estirada” de la cárcel y comercializarla.

El 20 de enero del año 2013, un menor de 15 años fue sorprendido al sacar sobres de cocaína de la cárcel, camuflados en una bolsa con dulces. Entró a visitar a un familiar y lo sorprendieron en pleno traslado de la droga. Andrés cuenta que, por las noches, los cómplices de los reclusos que venden la droga se paran en las afueras de la cárcel, en la calle Otero de la Vega, y desde ahí llaman por teléfono al interior.

Unos minutos después, lanzan sobres de droga envueltos en bolsas plásticas que son recogidos y vendidos como si nadie viera nada.

## Hacinamiento infernal

Roberto V. duerme todas las noches abrazado de un inodoro. No tiene dinero para pagar un espacio en un colchón; está en la cárcel por robo agravado. Él y sus cómplices, todos miembros de la pandilla “Los locos latinos”, ingresaron armados con cuchillos y una pistola a robar a un café internet. Una persona resultó herida. Roberto es el único detenido, otros dos salieron con medidas sustitutivas porque tenían dinero para pagar su libertad. Roberto no, y por eso trabaja dentro de la cárcel.

Es taxi de día. Ubica a los reclusos que son buscados por familiares o amistades. Por las noches vende droga y alcohol. El segundo trabajo es el más difícil porque los delegados de la cárcel lo tienen identificado. Por eso, por su comportamiento, es que no le dan un espacio en una de la secciones y tiene que vivir entre los más pobres del penal, los llamados “sin sección”.

La cárcel de San Pedro fue construida el año 1910 para albergar a 300 personas, pero ahora cobija a más de dos mil. Todo se vuelve más difícil porque es uno de los pocos centros de reclusión del mundo donde se permite que internos y familiares vivan dentro del penal. Esposas e hijos de diferentes edades entran al penal a dormir y salen de día a trabajar o al colegio. Los internos aseguran que es la única forma de recuperar su libertad, manteniendo el lazo familiar para no volver a reincidir en actos delictivos.

Entre los prontuariados de la cárcel que entran y salen como si nada, que pasan dos meses adentro y otros dos afuera, está Roberto C. Es ciudadano de nacionalidad peruana, pero decidió vivir en Bolivia como él dice “por el trabajo”. Cuenta de una asociación, un sindicato de ladrones, de cómplices que se protegen entre sí ante la desventura de estar preso. “Cuando uno cae, existe un fondo económico que sirve para pagar abogados y comprar conciencias de fiscales y jueces y así poder salir”. Personas como Roberto son los que operan para el “sindicato” dentro de la cárcel. Él es autero, roba autopartes y vehículos que después venderá en el mercado negro.

Desde la cárcel de San Pedro las víctimas de robos reciben llamadas pidiendo dinero a cambio de sus autopartes, ya sean flujómetros o cerebros de vehículos de último modelo. Piden entre 1.000 y 3.000 dólares, según la marca y el tipo de auto. Al interior de la cárcel se manejan redes de auteros que, para seguir en el negocio, se organizan y contactan con vendedores de seguros antes de “golpear”. Eso trasciende en la conversación con Roberto C., como él dice: “los auteros no somos delincuentes comunes, somos mecánicos, expertos”.

## **La Muralla**

Arrimados unos con otros y con las piernas encogidas duermen los internos castigados. Son sacados de las diferentes secciones del penal por mal comportamiento, por peleas o por robos dentro de la cárcel; por no cumplir las normas de limpieza, por vender o consumir drogas. Los castigados son trasladados a La Muralla, que es el sector con más hacinamiento dentro de San Pedro. Aquí pasan dos semanas o un mes como escarmiento hasta que vuelven a sus secciones; es un lugar donde se hace amigos, pero también se forman grupos de temor dentro del penal, para realizar cobros, extorsiones y vender seguros de vida.

Los amenazados casi siempre son los nuevos reclusos, a los que piden dinero a cambio de protección, un lugar donde dormir o simplemente por abuso.

La cárcel de San Pedro en La Paz tiene una población calculada de 2.536 internos, el 80% son detenidos preventivos sin sentencia ejecutoriada.

En San Pedro, el que quiere trabajar, trabaja; y el que quiere estudiar, estudia. Y el que no, pasa sus días de encierro durmiendo y sufriendo. Por más jodido que estés, si quieres rehabilitarte te rehabilitas. Es el caso de Roberto S., que es el “lustracalzados” del penal por la mañana y por la tarde abre su otro negocio: es el peluquero de la cárcel. Sus clientes hacen fila. “Me gusta trabajar, por eso está mi peluquería, en la tarde después de las doce peluqueo por 4 o 5 lucas, la lustrada un boliviano es”. Así cuenta Roberto S. su diario vivir en el encierro.

Existen asociaciones de sastres, carpinteros, adultos mayores, peluqueros y otros. Los delincuentes que mantienen su ocupación como un modo de vida también se organizan dentro de la cárcel con sus compinches que están afuera. Quedan en libertad, vuelven a delinquir y vuelven a estar encerrados, como si estuvieran acostumbrados a esa vida.

## **República Palmasola**

“Empezaron a lanzar las garrafas con gas y fuego, nos empezamos a quemar”.

Mientras muestra sus heridas, Diego N. de 19 años, interno del bloque A, decide romper el silencio después de la matanza, cuando la cárcel de Palmasola se tiñó de sangre y salió a la luz pública el poder de los reclusos detrás de los barrotes.

“A mí me dieron un machetazo”, cuenta Ramón O. sentenciado a veinte años por violación.

Lo ocurrido en esta cárcel el 26 de agosto del año 2013 es para el olvido...

## **Crimen y olvido**

La puerta de control 3, más conocida como Chonchocorito, fue el centro neurálgico de la tragedia. El recordar los gritos, el llanto, el sufrimiento de los heridos aun duele a los internos.

“Es algo que no se va olvidar nunca. Yo estaba inconsciente porque me dieron con un palo en la cabeza”. Juan O. recuerda así la historia del ataque, mientras muestra sus quemaduras de tercer grado en ambos brazos.

“Cuando yo salí del incendio, como todos tratando de salvar su vida, afuera había un grupo de gente listos para atacarnos. Todos armados con machetes, algunos con armas de fuego”, cuenta Ramón O., quien pasó 25 días en el hospital antes de volver al encierro. En Palmasola cura sus heridas.

En el bloque A de Chonchocorito viven 230 personas. Daniel V. es una de ellas. Aún dormía. Los gritos lo hicieron despertar, pero era demasiado tarde como para escapar. “Salté del segundo piso para sobrevivir, las heridas (por las quemaduras) me arden especialmente en la noche, no se puede dormir”. A los heridos se los reconoce fácilmente echados en sus camas y siendo socorridos por los demás internos.

Suenan las llaves que abren los candados. En el bloque B viven algo más de 200 personas que, desde el 26 de agosto, cuando ocurrió todo, están tras las rejas con 23 horas de encierro y una de sol. En este sector viven siete personas en una sola celda.

“Nosotros lo que pedimos es la visita de nuestros familiares, no tenemos visitas más que por cinco minutos y para eso ellos esperan tres horas afuera”, reclama uno de los internos que no quiso identificarse.

Como pisando suelo enemigo, Rudy J., representante del bloque B, entró a la casa de sus vecinos. Llegaba en busca de perdón. Un perdón que no le fue negado; todos miraban el momento del abrazo entre delegados de los bloques que se enfrentaron a muerte.

“Se dice que el bloque A va a tomar represalias con el bloque B, para nada, nosotros hemos perdonado a los del bloque B en nombre de Jesús”, asegura Ramiro C., el delegado del sector. “Hicimos un acuerdo de paz para no estar con ese temor de si van a entrar o no van a entrar, y para vivir bien”, dice Rudy J.

Un perdón necesario lleno de arrepentimiento, como una muestra de acercamiento, como un paso para estar lejos del delito.

## **El poder de los caídos**

En un sector alejado de toda la población están las celdas de castigo. Seis cuartuchos en medio de la soledad de las hectáreas de Palmasola.

Jilakatas, caciques, líderes, jefes. Tienen diferentes nombres. Así se les llama a los reos que mandan dentro de la cárcel. En Palmasola también están presentes, tras las rejas, con caras de malos, con el dominio que se escurre entre sus dedos.

Aún representan el poder dentro de la cárcel. Desde que les quitaron el mando después de la matanza de agosto viven y sobreviven como pueden, lejos de todos, con control policial especial. Una hora de sol y el resto del día tras las rejas y con candado, sin visitas, sin agua. Son los aislados.

A la cabeza de Roberto G., alias El Killy, recluso considerado peligroso, le pusieron precio en los momentos de conflicto dentro de la cárcel. Pide que filmemos su mejor cara, posa con gafas de sol. “El poder adentro se maneja con el encargado, lo que no tiene que haber son vicios y cuando hay viciosos adentro todas esas cosas pasan. Mentira que yo soy peligroso”, nos dice.

Willy P., alias El Gringo Azogue, sentenciado por asesinato, se saca el bolo de coca que mastica y escupe. Habla fácilmente de asesinatos y muerte como si se tratara de un tema más. “Nosotros teníamos rencillas de muerte con el Chichuriru. Me metieron en la misma celda, donde tuve que pelear porque ese tipo era un asesino. Peleé gracias a Dios, o en estos momentos, si no lo hubiera matado yo a él, el que hablaría con ustedes sería Chichuriru no Gringo Azogue. Se murió el Chichuriru”, afirmó.

Es día de visita. Familiares de varios privados de libertad denunciaron cobros de cinco a 20 bolivianos que realizarían algunos policías para dejar entrar a las visitas. Nos cuentan que hay seguros de vida que llegan a costar hasta mil dólares para que un reo no sea golpeado, amenazado o asesinado. Los internos denuncian que deben pagar a los policías para ir a audiencias judiciales.

### ***Made in PC4***

En la cárcel de Palmasola viven 5.300 reclusos, desde los más peligrosos en celdas de castigo especial, hasta los detenidos por delitos comunes. Es como una ciudad chiquita.

Donde se mide el poder a flor de piel es en el gimnasio del penal. Entre el rock que sale de una vieja radio y fotografías de mujeres posando en lencería resaltan el “Conan” y el “Demonio”, así son sus apodos dentro de la cárcel. El primero sentenciado a 10 años por trata y tráfico de personas y el segundo a seis años por robo agravado.

Levantan pesas, hasta 100 kilos cada uno. Pese a sus músculos y a su presencia que infunde temor, la entrevista les saca una lágrima. Su imagen fuerte se desmorona

cuando recuerdan a su familia que está afuera. “Cuatro niños, pero no hay nada. No me queda nada más que lagrimear, cumplir y esperar” dice Conan. “Si me está escuchando mi hijita, mi padre, mi madre, todos mis hermanos, pronto estaré con ustedes. Los quiero mucho”, afirma el Demonio.

La comida que servirán a los reclusos hoy es ají de plátano. En Palmasola está la cocina más grande del país, en la que 30 reclusos preparan alimentos para más de 5.000 personas. Las ollas salen rumbo a la cocina de la cárcel, donde cortan la carne, lavan el hueso, prenden los fogones. Cocinan para cientos, para miles. El agua hierve y la cocina se convierte en un horno. Jimmy Condori es el encargado. “Todos los días, a excepción de jueves y lunes, es sopa, el otro día asado en olla, picante de pollo, milanesa”.

Los policías tienen otro tipo de comida. Con su prediario de cinco bolivianos al día, que “no alcanza para nada”, comen lo que pueden. Son 40 policías por turno para controlar a más de 5.000 reclusos. También se quejan de que la cárcel de Palmasola se cae a pedazos, con la humedad a cuestras y los alambres de púas que ya no resisten. Las torres de control se han convertido en un adorno y los policías fueron sustituidos por cámaras de seguridad.

## **La cárcel de la cárcel**

Si te portas mal, si eres peligroso, si te puedes convertir en una amenaza, te vas a la cárcel que está dentro de la cárcel. En Palmasola, el PC7 es un lugar de aislamiento. Todos están en celdas y nadie sale. El PC7 se ha convertido en un lugar peligroso, temido hasta por los policías que ingresan pensándola dos veces. Las visitas no entran.

Pastores de diferentes congregaciones religiosas vienen hasta el PC7 a rezar junto a los internos, como para cambiar sus mentes. El mal por el bien. Los rezos logran poco; todos protestan, no están contentos con el trato, gritan, amenazan, desafían. “Por último que me trasladen a otro departamento, igual voy a estar mejor que acá”. “No podemos salir, nos dan 15 minutos máximo para salir afuera”, aseguran los internos del PC7 que no quisieron identificarse.

Otro lugar de aislamiento es la puerta de control 5; todos nos miran desconfiados. Resulta que estas personas fueron sacadas de otros pabellones por enfermedades: 42 con tuberculosis, 10 con VIH. Cada uno tiene una celda, además de un huerto de tomates y sandías que luego venden. Limpian los pasillos, paredes y baños continuamente para evitar que las enfermedades se expandan.

Entre los barrotes y el encierro, los que viven en la cárcel dentro de la cárcel se han convertido en una amenaza: el que no mata, muere.

## Chonchocoro, la más segura del país

Largo viaje desde La Paz a Chonchocoro, comunidad que se hizo famosa por su cárcel, la más segura del país. Llegamos al lugar para pasar las próximas 48 horas viviendo como reclusos, comiendo lo que comen, durmiendo donde duermen. Personas acusadas y sentenciadas por asesinato, crimen organizado, homicidios, violaciones o alzamiento armado, entre otros delitos.

Aquí, detrás de estas rejas y altas paredes, viven 118 privados de libertad.

### Entre asesinos y violadores

David I., más conocido en la cárcel como Jason, es un hombre de 27 años. Tres años lleva encerrado tras las rejas de esta prisión. Esta persona, acusada de asesinato, juega con sus dos gatos: Fígaro y Peluchín. Mientras los acaricia, sentado en su cama, me cuenta que su caso fue muy conocido. Él utilizó un hacha, un martillo y un cuchillo para asesinar a su madrastra. “He cometido el delito de asesinato, el artículo 252 con sus numerales 2 y 3 y 6 que dice con alevosía, ensañamiento y planificación”. El Jason sabe de memoria la tipificación de sus delitos pues dentro de la cárcel estudia Derecho.

Cuando ocurrió lo de la muerte de su madrastra, él pertenecía a la pandilla “Los vatos locos”, distribuidos por El Alto y La Paz. En Chonchocoro se encontró con dos líderes de su pandilla y decidieron reorganizarse para controlar su grupo desde el encierro. Así lo hacen una vez al mes, cuando sus “cofrades” llegan hasta la cárcel a rendirles cuentas y a entregarles dinero por los golpes que dan. Ese dinero sirve para mantener a sus familias que están en libertad.

Entre los pasillos de esta cárcel se tejen historias de todo tipo, unas más sangrientas que otras. La gente más peligrosa está aquí detenida tratando de reformarse, unos lo logran, otros no.

Willy P. se acerca, me habla al oído como un amigo más. Me dice que no quiere ser entrevistado pero sí contarme lo que hizo y porqué está en la cárcel. “Soy el descuartizador de Santa Cruz”, asegura, contando su caso como si estuviera narrando una historia de terror.

Todo ocurrió el 23 de febrero del año 1999, cuando salió con unos amigos a tomar un trago. Ahí conoció a Rosalía, con quien terminó en su casa entre besos, arrumacos y alcohol. Luego una discusión, un empujón y la muerte. Ante lo ocurrido, Willy no supo qué hacer y recurrió a una vieja cierra eléctrica para descuartizar el cuerpo. Lo dividió en 6 partes. En el transcurso de los próximos días fue abandonando partes del cuerpo de Rosalía en diferentes calles de Santa Cruz. Un brazo en el primer anillo,

una pierna cerca a la plaza principal, el torso en el mercado La Ramada, hasta que la Policía empezó a encontrar las partes y a investigar.

Por otro lado los familiares de la víctima habían reportado la desaparición y también la buscaban. La Policía buscó a testigos y amigos de Rosalía, quienes apuntaron directamente a Willy P. Cuando allanaron la casa del acusado, los oficiales encontraron en su refrigerador la cabeza de Rosalía, la parte del cuerpo más difícil de ocultar.

Entramos a la celda de Alfredo, de 47 años. Lo vemos realizando trabajos de porcelana fría y madera. En la entrevista me cuenta porqué está en la cárcel hace 12 años como sentenciado. Lo acusan de violación; 122 serían sus víctimas. Él dice que es inocente y que se trata de represalias en su contra cuando era dirigente de las juntas escolares. Por eso lo mantienen en la cárcel, asegura. “Por mi familia y mis hijas, tuve que irme al abreviado aceptando un delito que no cometí y ahora me encuentro sentenciado a 20 años”. Alfredo aprendió en la cárcel todo lo que sabe en trabajos manuales, con esto mantiene a su familia. Tres de sus hijas lo visitaron después de la entrevista.

Decidimos ingresar a los bloques B y C. Aquí nos intercepta en nuestro recorrido Wilfredo, un joven de algo más de 20 años. Es uno de los detenidos por el asesinato de dos ciudadanos austriacos que fueron secuestrados, asesinados y enterrados de manera clandestina en el cementerio La Llamita en La Paz, en enero del año 2006. Wilfredo ahora compone canciones de rap. “Noches de frío con cartones me he tapado, salimos una tarde yo y mis amigos en busca de dinero y el respeto que yo quiero. Saco un arma, le pongo en la frente, aprieto el gatillo. Se me escapa una bala. Entre rejas y pasillos condenado, maltratado en la cárcel de San Pedro Chonchocoro me he encontrado. Por matar a un hermano que se puso en mi camino. Linda madrugada, me despierto en la mañana, sigo en la cama metido en la cama fumando marihuana. ¿Cómo quieren que yo cambie si la coca y la mota abundan en mi vida?”.

## CÁRTELES MEXICANOS DE TERCERA GENERACIÓN OPERAN EN BOLIVIA

Desde puntos estratégicos del país, peligrosos cárteles mexicanos controlan la producción y el tráfico de drogas, así como los “ajustes de cuentas”. Esta realidad no puede ser más vista de reojo.

ROBERTO Charca  
jrcharca@gmail.com

Periodista de larga trayectoria en medios impresos. Fundador del diario *Página Siete* de La Paz y *El Alceño* de El Alto. Experto en seguimiento informativo de temas de seguridad. Este reportaje fue escrito en noviembre de 2014.



El poder económico y el control de zonas de acopio y traslado de drogas han traído a Bolivia a grupos extranjeros de crimen organizado.

Al menos dos cárteles mexicanos denominados de “tercera generación” han movido algunas de sus piezas a Bolivia para tomar el control de centros y puntos de acopio y traslado de drogas, de acuerdo con un informante de la Policía al que accedió este periodista en Cochabamba, en 2014.

Este nuevo grupo de narcotraficantes extranjeros ha sido identificado por efectivos de inteligencia de la fuerza anticrimen después que en más de dos operativos de interdicción hallaron a por lo menos cinco súbditos mexicanos involucrados con la producción y el transporte de drogas de Bolivia hacia Brasil.

En cambio, expertos en narcotráfico, policías y civiles, consultados al respecto, han señalado que los mexicanos han migrado hacia esta región de Sudamérica por las facilidades que brinda el país al ser el corazón del subcontinente y presentar condiciones, en este caso, para operar como corredor de cocaína. La extensa frontera compartida con cinco países sitúa a Bolivia en una posición ideal para el circuito del narcotráfico en el sur.

A ello se suma que el país es vulnerable en términos de capacidades logísticas y militares; y las oportunidades y el potencial de ganancias del narcotráfico son demasiado altos como para que los grupos criminales internacionales ignoren esta plaza. El precio de la “mercancía” en Perú y Bolivia es cinco o diez veces menor al que se paga en Buenos Aires o Sao Paulo. Sacar droga de estos países es un gran negocio para los mexicanos, mucho más si se apunta a los mercados de Estados Unidos, Europa, África y Asia.

## San Julián

San Julián ha sido elegida inicialmente como el área de operaciones de los mexicanos y como el nuevo corazón de las transacciones ilícitas que se realizan en complicidad con los pobladores de la zona, donde la mayoría vive del narcotráfico, según otro efectivo de Inteligencia de la fuerza antidrogas. Si no son parte del circuito productivo de la droga, son empleados o contratados como proveedores de bienes y servicios, en trabajos de carpintería o vendedores de comida.

Además, se ha señalado que Bolivia no es solo un país de tránsito de drogas sino también una nación productora de coca y cocaína. Esta realidad hace cada vez más difícil el contener la ambición de los mexicanos, señalan los informantes. Por la facilidad para conseguir insumos químicos, los narcos prefieren cristalizar la droga (paso de pasta base a clorhidrato de cocaína de alta pureza) en las selvas bolivianas.

Algunas de las muertes violentas registradas en Santa Cruz han sido asociadas con estos cárteles. Sin embargo, el Gobierno se ha negado a reconocer la presencia de estas bandas criminales en el país. Un policía local, de quien se guarda el nombre en reserva, explicó que los degollamientos o cercenamientos de víctimas son prácticas comunes de los delincuentes del crimen organizado en México.

En tanto que los emisarios colombianos, de quienes se desconoce si son miembros activos de los cárteles de ese país, utilizan el sistema de ajusticiamiento con armas.

Los informantes han señalado que los narcos mexicanos se han desplazado a Bolivia porque la producción de droga ha sufrido un giro debido a la represión que se ejerce en otras regiones de Sudamérica, lo que puede implicar un probable aumento del cultivo de coca en el país, además del consumo interno, siempre y cuando se mantenga constante la demanda, interna y externa.

De acuerdo con datos referidos por oficinas especializadas en el tráfico de drogas de las Naciones Unidas, se conoce que Perú exporta alrededor de 200 toneladas de base de coca a Bolivia al año, algunas de las cuales alimentan los mercados domésticos de cocaína, crack o bazuco de Brasil y Argentina. El resto de la base de coca es procesada y convertida en cocaína. En 2013, los agentes antidroga han descubierto otra ruta por el sur de Chile, donde los comunarios se han convertido en “coyotes” de la droga, explica un efectivo de inteligencia de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN).

## Yungas y Chapare

Por el momento, los cultivos de coca en Bolivia siguen concentrados en las dos zonas tradicionales de producción: Yungas de La Paz y la región del Chapare de Cochabamba. Sin embargo, existe evidencia de que parte de la coca, destinada al mercado de la cocaína, está siendo cultivada fuera de estas áreas, a veces en los parques nacionales.

Los reportes apuntan a zonas de cultivo consideradas no tradicionales como el Madidi en el norte de La Paz o el Parque Carrasco y el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécore en el trópico de Cochabamba, en locaciones muy cercanas al Chapare. También se detectó que los cultivos ingresaron en el departamento de Santa Cruz, en la provincia Ichilo. La coca puede cosecharse tres o cuatro veces por año, hecho que convierte a este cultivo en el más productivo y redituable para los campesinos. Es uno de los pocos productos que tienen el mercado asegurado, sea legal o ilegal.

## Lago Titicaca

El lago Titicaca se ha convertido en un punto vulnerable al narcotráfico, puesto que ahora es allí por donde se transporta la pasta base de cocaína que llega desde el Perú.

Al menos tres grupos de narcotraficantes extranjeros se disputan el control de envío y recepción de droga por el lago Titicaca, según pudimos conocer de fuentes de la FELCN.

Estos grupos están conformados por extranjeros peruanos, colombianos y mexicanos, que controlan además el transporte de la mercancía desde La Paz hacia Pando, Beni, Santa Cruz y el Chaco chuquisaqueño.

La disputa por el control ha generado también la creación de grupos o clanes bolivianos que se alían al “mejor postor” en lo que refiere al acopio y traslado de la mercancía por vía terrestre en el país.

A pesar de que el Gobierno ha identificado a la zona lacustre como un punto vulnerable al narcotráfico y los efectivos antidroga de Bolivia han intensificado sus operaciones de seguridad para combatir la creciente presencia de estos grupos de narcotraficantes en la región, se trata de una zona descuidada y estratégica para los emisarios de cárteles que han comenzado a asentarse en el país camuflados en negocios lícitos.

El coronel Mario Centellas, director de la FELCN, reveló que las fuerzas de seguridad han intensificado los esfuerzos de interdicción en la región amazónica, destruyendo laboratorios e incautando aviones utilizados para el transporte de drogas. Empero los narcos han migrado hacia el norte del país donde la topografía y la falta de accesibilidad por lago o vía terrestre han facilitado el tráfico de drogas en esa zona.

El año pasado, el vicealmirante de la Armada Boliviana, Gonzalo Alcón, reconoció que carecen de radares y otros recursos necesarios para la interdicción en el lago, como son las lanchas pirañas, aunque para esta región, occidente, las embarcaciones, además de rápidas, deben contar con otras especificaciones técnicas distintas a la región oriental.

La falta de equipos y evasión del control en el Titicaca ha sido confirmada por el viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, quien dijo que el tráfico de drogas por la zona lacustre se incrementó. Además indicó que la falta de recursos logísticos imposibilita un adecuado control en la zona pese a que las Armadas del Perú y Bolivia, acantonadas en el Titicaca, están en estado de alerta.

Un comunario en Tiquina, sector donde solo cuatro de cada 10 personas que cruzan son controladas por efectivos de la Armada y por dos policías, declaró que se traslada drogas al por mayor y que las aguas del Titicaca se han convertido en “el corredor de oro” para los narcotraficantes que llevan la mercancía de Perú a Bolivia. “Llegan por este punto como turistas y después alquilan lanchas y botes”, afirmó el informante a *La Prensa* quien ha trasladado a súbditos colombianos y algunos mexicanos.

El exministro de Gobierno, Carlos Romero, ya había alertado de la “penetración de droga que se produce en el Perú hacia Bolivia” y que se registra a través de “zonas de vulnerabilidad”, en este caso el lago Titicaca que comparte dos naciones. La afinidad que hay entre peruanos y bolivianos es aprovechada por las organizaciones criminales.

## Mexicanos en Bolivia

Los cárteles mexicanos afianzan sus operaciones utilizando su propia gente que se ha incrustado en el país desde hace más de dos años, pese a la negativa de su existencia por parte del Gobierno, según evidenciaron investigaciones policiales y de civiles especializados en narcotráfico.

Muchos de los integrantes de cárteles de tercera generación, como Sinaloa, cuentan con mandos propios que operan desde Santa Cruz y Beni, donde ahora existen oficinas de “cobranzas” y “ejecuciones”. También es conocido que son estos empresarios los que intentan ingresar al mercado del microtráfico controlado, por ahora, por clanes familiares locales en el que está incluido el bazuco o paco, que es como la cocaína crack, droga con mayor consumo desde hace dos años y que está atacando a la población del país.

## Iruni, fuera de los mapas EL NARCOPUEBLO

Un operativo de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), realizado el 28 de septiembre del año 2013, puso en la agenda de los medios a Iruni. Esta pequeña población, casi invisible en los mapas, ha dejado el trabajo con el ganado y la agricultura, para dar paso a la producción de la cocaína.

ADRIANA Gutiérrez Ampuero  
aadriana.gutierrez@gmail.com

Periodista de investigación y crónicas de la red televisiva PAT. Docente freelancer de la Deutsche Welle Akademie. Ganadora de la medalla "Franz Tamayo" el año 2013, que reconoce a las nuevas generaciones de periodistas, entre otros reconocimientos obtenidos. El reportaje incluido en esta publicación fue realizado en el año 2013.



Tiene más de 60 años, la piel quemada por el sol del altiplano y profundas arrugas que asoman como grietas en su rostro. Se llama Julia<sup>1</sup> y viste polleras grises. Le preguntamos por gasolina. Asustada, nos respondió con otra pregunta: si vimos en el camino a la Policía. Le hablamos de Iruni. Julia dibujó una cruz en la boca y dijo: “no sé nada”. Está prohibido romper el pacto de silencio.

## No aparece en el mapa

Desde que llegamos al departamento de Oruro y preguntamos cómo llegar a Iruni, las personas consultadas comenzaron a susurrar. Un policía que participó en un operativo en la zona se acercó a decirnos que era mejor desistir del viaje porque entrar en la tierra de los narcos podría significar salir con un balazo en la cabeza. Trató por todos los medios de persuadirnos para no tomar la carretera en la que solo circulan camionetas 4x4. Cuando vio nuestro Toyota Ipsum sentenció que no llegaríamos lejos.

El 28 de septiembre de 2013, un operativo realizado por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) descubrió que en Iruni se procesaba pasta base de cocaína. Hasta ese momento nadie se animaba a decir que era un narcopueblo, sin embargo se supo que de las 28 construcciones de la localidad, en 26 se producía cocaína. Vale añadir que Iruni es considerado el último rincón de Bolivia. No más de 10 militares de bajo rango están a cargo de la seguridad en la zona.

Quienes nos advirtieron tenían razón. Llegar a Iruni no fue fácil. No hay señalización ni datos exactos de dónde se encuentra. Es más, este pueblo no aparece en los mapas.

Iruni está ubicado en el municipio de Turco, en la provincia Sajama, a 250 kilómetros de la ciudad de Oruro, en la frontera con Chile. Y muy cerca de la localidad de Sabaya, frontera con Pisiga, lugar donde la Policía y el Control Operativo Aduanero (COA) temen ingresar porque es territorio de contrabandistas.

Nadie olvida que el 21 de enero del año 2003, el teniente Samuel Encinas, del COA, se perdió cumpliendo su primer día de trabajo en Pisiga. Después de un enfrentamiento con supuestos contrabandistas y de un desperfecto en el vehículo de la Aduana, decidió salir en busca de ayuda y, desde entonces, hasta la fecha, no se



1 Nombre ficticio para proteger a la fuente.

sabe de él, pese a los interrogatorios de los fiscales, abogados y policías. Ninguno pudo romper el pacto de silencio de los pobladores. Se dice que el cuerpo de Encinas terminó como una ofrenda al tata Sajama, el nevado al que según cuentan ofrecen los contrabandistas ch'allas y mesas para que sus negocios salgan bien. En estas comunidades, los pactos de silencio no se rompen.

Poco a poco nos adentramos en los paisajes casi fantasmagóricos que llevan al narcopueblo...

En nuestra búsqueda llegamos a la comunidad de Huachacalla, la última población grande que encontramos en el camino. En este pueblo las casas son de adobe, todas tienen garajes y, dentro, vehículos sin placas. La mayoría de las movilidades que vimos lleva el volante a la izquierda, lo que nos hizo suponer que son vehículos indocumentados, también conocidos como "chutos", porque ingresan de forma ilegal a Bolivia y su venta está prohibida.

No hay patrullaje. En 20 horas de viaje, no vimos ni a un solo policía o militar por la zona.

Hasta la comunidad Japón hay camino, después uno se encuentra con la nada. Arena y paja brava, además de varios senderos que confunden. Algunos dicen que las brechas son abiertas a propósito para que no se encuentren las fábricas de cocaína.

Es la tierra de los flamencos rosados, los quirquinchos, las llamas y la paja brava.

Nos sorprendió ver en el trayecto pueblos pequeños con paneles solares, agua y electricidad, pero sin gente. Y todas las casas aseguradas con candados.

Las llamas pastean solas.

En el camino encontramos a los "chuteros" ingresando a Bolivia cinco vehículos Toyota Ipsum. Como el ingreso por Challapata está controlado, ahora utilizan jeeps de guías que los traen por rutas alternas. Descubrimos un nuevo punto de ingreso del contrabando automotor.

En esta región hay dos cuarteles, uno en Huachacalla y otro en Ulo. En Ulo preguntamos si conocían Iruni. En teoría, los militares cuidan la frontera y nada se debería mover en su zona de control sin que ellos lo sepan. Sin embargo nos equivocamos, porque no sabían de la ubicación del narcopueblo. En la práctica, solo hacen patrullaje temprano en la mañana y en el resto del día no salen del cuartel.

En la zona no hay conexión telefónica.

Cuando casi salíamos de Bolivia, en la frontera con Chile, nos encontramos con un comunario en una bicicleta. Le preguntamos por Iruni e inmediatamente dijo: “Malo, malo, es”. Prefirió no saber a qué íbamos a ese pueblo. “Con ese auto no vas a poder llegar, nosotros andamos en 4x4. El río Lauca no vas a poder cruzar, pero tú sabrás a qué vas bajo tu riesgo”, agregó.

Entonces nos señaló el camino y nos dijo que “sí o sí” debíamos llegar a la comunidad de Japón; de allí desviar y seguir por un camino de arena hasta toparnos con el río Lauca.

Así lo hicimos. Llegamos hasta la comunidad de Japón sin mucha gasolina. Apareció Julia y nos preguntó qué hacíamos por el lugar. Cuando le dijimos que nos perdimos y que queríamos conocer el río Lauca y la comunidad de Iruni, enfática respondió que no sabía nada. Después de insistir, mirando a un lado y a otro, casi susurrando, nos dijo: “No, no hay que ir a ese lado, no vas a ir a Iruni”. Todos saben lo que pasó en Iruni doce días atrás, el 29 de septiembre de 2013. Los descubrieron. Alguien rompió el pacto de silencio.

“Los había descubierto narcóticos, y atizaron su trabajo”, relata Julia. Le preguntamos qué atizó narcóticos: ¿droga? Nos devuelve un guiño afirmando que ese es el “trabajo” de los pobladores.

“La gente había escapado, dicen, los han visto llegar y rápido han salido ellos. Saben pues por donde, ahora no hay gente ahí. Aquí no hacemos eso, porque Iruni es del Lauco más al frente. Todos los del pueblo por esa zona se están dedicando a trabajar así”, agregó. Mientras charlábamos, vimos una camioneta ploma con unos sujetos y unos saquillos parecidos a los de coca. Julia se calló y se alejó de nosotros. La camioneta se perdió en uno de los tantos caminos que hay para despistar a quien está buscando los narcopueblos.

Julia nos dio la gasolina que necesitábamos y nos cobró cuatro veces más de lo que habitualmente cuesta. Ella dijo que la gasolina se vende bien por allí. Seguimos nuestro camino sin hacer caso a sus advertencias.

En el camino principal desviamos hacia la derecha. Al principio pensamos que era un error pues ni bien avanzamos el camino desapareció y el vehículo se atascó en la arena. Más de dos horas perdimos en sacar el auto del arenal. De nuevo pasó la camioneta ploma, esta vez sin los saquillos de coca. Los ocupantes nos miraron y no intentaron ayudarnos.

Nos dimos cuenta que por la inmensa zona de la frontera circulan muchos autos 4x4 como si estuviesen patrullando, y otros cargados de saquillos que se pierden en los pueblos.

Para llegar hasta Iruni, se presentan varios obstáculos. La arena atasca a cualquier vehículo cuyo chofer no conozca la ruta o que no tenga doble tracción. El río Lauca, al que llegamos después de 24 horas de iniciado viaje, tiene sus aguas heladas; no es un río profundo pero para cruzar el chofer debe saber por dónde, caso contrario el auto queda atascado en la mitad del cauce. Toca dejar el vehículo y continuar a pie en busca del narcopueblo y así conocer qué pasa en las fronteras de Bolivia y qué tan fácil es elaborar cocaína.

## Al frente, en lo alto de un cerro

Cruzamos el Lauca caminando. Al frente vimos un pueblo, con las mismas características de los que conocimos antes: paneles solares y varias casas de adobe. Era exactamente como nos lo describieron. Un pueblo en un cerro. Es por su ubicación que durante la intervención no hubo detenidos.

Después de caminar un kilómetro, nos topamos con alambrados que rodean a todo el pueblo. El primero se advertía a simple vista, sin embargo, tras pasarlo, encontramos otro a cien metros camuflado entre los arbustos.

Cuando pensamos que por fin llegaríamos a Iruni encontramos otra laguna que rodea el cerro. Estaba completamente contaminada, tenía un color verdusco y olía mal. En el fondo se divisaban bolsas enterradas, alrededor había coca molida. En los alrededores vimos varias llamas muertas. Parecían intoxicadas, con los estómagos hinchados.

Solo hay dos formas de cruzar: meterse al agua o encontrar algún sendero.

Llegamos al lugar caminando y trepando el cerro ante la mirada atenta de las llamas. Sin embargo nuestra estadía duró poco, porque a lo lejos vimos gente que se acercaba.

Iruma está en la cima de un cerro desde donde se divisa territorio boliviano y chileno. También se puede controlar los múltiples caminos que existen. A kilómetros se puede ver si llega o no la policía o cómo pasan las camionetas 4x4 de Bolivia a Chile. También el ingreso de los vehículos indocumentados y el contrabando.

Llegamos al lugar doce días después de la intervención de la Policía para saber qué está pasando en las fronteras. El único rastro de aquel operativo era la droga quemada en medio del pueblo.

Iruma tiene agua potable desde 1998; la conexión se hizo durante el gobierno de Hugo Banzer Suárez. De las 28 casas que hay en el lugar, todas presentan condiciones

para elaborar droga. Encontramos una importante cantidad de envoltorios para empaquetar la droga, así como los moldes para preparar los paquetes, tachos, tazones, batidoras y una serie de objetos de utilidad para poner en funcionamiento fábricas de droga.

Cerca de la poza de maceración había recipientes que contenían gasolina, diesel, ácido sulfúrico, bicarbonato de sodio y otras sustancias que se utilizan en la elaboración de la pasta base. En la iglesia de adobe destacaba una imagen del tata Santiago. En la escuela había papeles amontonados sobre los pupitres de cuando los niños estudiaban en la comunidad. También apareció una posta sanitaria.

Después del operativo todos volvieron. Las casas allanadas fueron arregladas y las puertas aseguradas con alambres y candados. Borraron evidencias. En el lugar solo quedan algunos utensilios para la fabricación de droga.

Encontramos rastros de rituales. Alrededor del pueblo estaban quirquinchos muertos, hembra y macho, envueltos con hojas de coca y billetes de alasitas para llamar a la suerte y la fortuna. También velas negras, mesas y botellas de alcohol en el cementerio.

No habían indicios de que el negocio dejó de funcionar en el lugar.

En un punto extraviado en medio de la frontera entre Bolivia y Chile se encuentra Iruni, conocido desde septiembre de 2013 como el “narcopueblo”. A dos años de este reportaje la Policía no volvió al lugar, sin embargo el narcopueblo sigue funcionando.



## Los diferentes rostros de una realidad ICHILO, VÍCTIMA Y CÓMPLICE DEL NARCOTRÁFICO

En la provincia Ichilo de Santa Cruz viven más de 92.000 personas, distribuidas en los municipios de Buenavista, San Juan, San Carlos y Yapacaní. La vida de sus pobladores ha cambiado en los últimos años por la presencia del narcotráfico. En los bosques es posible encontrar grandes extensiones de cultivos de hoja de coca, y el río Ichilo se ha convertido en un afluente de “oro” por donde se transporta cargamentos de droga.

NELFI Fernández Reyes  
nfernandez@eldeber.com.bo

Periodista de *El Deber* de Santa Cruz, especializada en seguridad. Becada por la Fundación del Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI) para el curso de Periodismo de Investigación para Cobertura de Seguridad Ciudadana. Este reportaje se publicó en la FNPI y en el diario *El Deber* el 17 de octubre de 2014. Videos e infografías de este reportaje en: <http://www.fnpi.org/seguridadciudadana/?p=282>



## La hoja milenaria en un lugar prohibido

Atrás quedan los ríos Surutú, Isama, Llantatá y Mataracú. Después de recorrer 25 kilómetros, partes en vehículo y otras a pie, se avista el primer cultivo ilegal de hoja de coca de una superficie aproximada de dos tareas (20.000 metros cuadrados). Protegido por un bosque de 30 metros de altura y sin más camino que el de los animales salvajes, se yergue en una de las esquinas del Parque Nacional Amboró, en el sindicato Mataracú de la provincia Ichilo, departamento de Santa Cruz.

Las plantas no tienen hojas, al parecer recién fueron cosechadas. No hay personas en el lugar, solo botes de agroquímicos que se aplicaron al cocal. A medio kilómetro de distancia hay otra plantación de coca, de una tarea (10.000 metros cuadrados) de extensión.

Funcionarios de la Alcaldía de San Carlos también corroboraron y recibieron denuncias de la existencia de seis cultivos de coca en el sindicato Oriente Chicha y de al menos ocho en el sindicato Mataracú, todos dentro del Parque Amboró.

La gigantesca selva y la falta de caminos son una ventaja para los cocaleros que, contraviniendo las leyes, talan árboles para plantar la hoja milenaria destinada al narcotráfico, según el Ministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas.

El alcalde de San Carlos, Serafín Espinoza, admite que a su despacho le han llegado denuncias de la existencia de cultivos ilegales de coca; sin embargo, cree que algunos campesinos siembran el arbusto para su consumo. Pese a ello, dijo que trabaja en coordinación con la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) para que intervenga y erradique cicales.

Serafín es un firme creyente de que solo con proyectos que permitan a los agricultores incrementar su producción y mejorar sus condiciones de vida se evitará que caigan en las redes del narcotráfico. Otra de las prioridades para este alcalde norteño es la educación en valores a los colegiales para que aprendan a decirle no a las drogas.

El responsable de Seguridad Ciudadana de la Gobernación de Santa Cruz en Ichilo, Enrique Hidalgo, dice que se ha puesto en marcha una campaña, junto a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), en las unidades educativas de la provincia Ichilo para que los estudiantes no se dejen seducir por el narcotráfico.

El informe que la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC) presentó en junio de 2014 da cuenta de que hasta el cierre de la gestión 2013, Bolivia tenía una superficie de 23.000 hectáreas de cultivos de coca repartidas en los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. De esa cantidad, el país solo necesita 14.000 hectáreas para el consumo.

En Bolivia, los únicos lugares autorizados para la siembra de este arbusto son los Yungas de La Paz y el trópico de Cochabamba; sin embargo, y pese a ser ilegal, la ONU registró 48 hectáreas en la provincia Ichilo de Santa Cruz, región en la que los cultivos de coca excedentaria han aumentado un 3%, en comparación a 2012.

## Por las aguas del Ichilo

Brama y el ruido rompe el silencio impoluto de la noche agostina en el río Ichilo. No hay viento, solo oscuridad. El sonido del motor no proviene de algún vehículo acuático, sino del interior de la selva de Puerto Ichoa. A decir de algunos pobladores y pescadores de la provincia Ichilo, esas máquinas pican hoja de coca que alimenta al narcotráfico y es “normal” que empiecen a funcionar después de que se esconde el sol.

Por ejemplo, un pescador cuenta que alguien, en Puerto Grether, le ordenó que se alejara de allí después de machetearle su conservadora. Otro dice que en Chipiriri, una lancha se acercó y quien la conducía le dijo con total descaro: “Usted haga lo que quiera, que yo hago lo mío, pero ojo: aquí no vio nada”. Aunque absurda, pero fue lanzada la pregunta: “¿Y usted qué hizo?”. “Nada”, responde. “Para qué ‘abrir la boca’ si valoro mi vida”. Al rato dice que ya eran dos los que pasaron a bordo de la misma lancha, pero esta vez, cargada de taques de coca.

Estos testimonios impulsaron a esta periodista a navegar en el Ichilo, a contracorriente, desde Puerto Villarroel, frontera de Cochabamba con Santa Cruz, pasando por Puerto Ichoa y Puerto Grether, hasta ingresar a la provincia Ichilo, por el municipio de Yapacaní. Durante las 48 horas que duró la travesía se escuchó funcionar, después de las 18.30, cuatro motores a una cierta distancia de la orilla del río.

El atascamiento vehicular, las normas de tránsito o los semáforos que controlan el tráfico de cualquier ciudad del mundo, no existen en el lugar. Por allí circula lo que usted quiera que circule, con o sin prisa y a cualquier hora del día, pero cuando el sol se esconde el movimiento no solo es sobre las aguas del Ichilo, sino también en sus riberas.

La actividad pesquera es intensa, el transporte acuático también. Pescadores lanzando el anzuelo o la red se ven a lo largo y ancho del afluente amazónico de aguas profundas y sin piedras a la vista.

Embarcaciones con madera, productos agrícolas, bidones de combustible, conservadoras y cargamento cubierto con frazadas pululan en el Ichilo.

Este río es una mina de oro de 7.968 kilómetros cuadrados. Centenares de especies acuáticas se arrebujan en su seno y un trenzado bosque custodia sus orillas.

Allí habita el único bufeo que tiene Bolivia, el *Inia boliviensis*, que no se hace problema por chapotear junto a los peces, patos y garzas, produciendo un atractivo espectáculo.

## **Coca ilegal del Chapare**

El Gobierno revela que no tiene control en este pedazo del territorio de Bolivia. El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Felipe Cáceres, dice que es “humanamente imposible” controlar lo que se mueve en este río, pese a que la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) y los Diablos Azules de la Naval redoblan sus esfuerzos en los operativos para frenar las actividades relacionadas con el narcotráfico.

Cáceres afirma que por tierra y agua ingresa a la provincia Ichilo coca ilegal de Chapare y de Yungas, así como precursores químicos y combustible, todo esto destinado a la elaboración de la cocaína. La figura es clara para el Viceministro: “hay miles de desvíos, si no es por los caminos es por los ríos. De noche trasladan coca sin ningún tipo de autorización”.

La provincia Ichilo descansa sobre 14.232 kilómetros cuadrados en el norte de Santa Cruz. Dentro de sus fronteras viven, según el censo de 2012, 92.721 personas, repartidas en cuatro municipios: Buenavista, San Juan, San Carlos y Yapacaní.

## **En la mira del Gobierno**

Desde el último lustro, este territorio se encuentra en la mira del Gobierno por la presencia del narcotráfico. Solo en un año, de marzo de 2012 a marzo de 2013, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), según un informe del Ministerio de Gobierno, ha ejecutado 6.097 operativos, lo que permitió dismantelar 6.021 fábricas de cocaína y detener a 26 presuntos narcos con 15 toneladas de cocaína.

La cobertura periodística del diario *El Deber*, muestra que la FELCN, de enero a septiembre de 2014, incautó 1.568 kilos de cocaína sólida, 950 litros de cocaína líquida, 8.000 litros de precursores químicos y dismanteló 124 factorías. Solo hubo 27 personas detenidas.

## **Yapacaní, el municipio que no quiso una base antidroga**

Eran las 16.00 de un soleado 26 de marzo de 2014 en Puerto Yapacaní. Tomás Cailo, junto a sus hijos, desde su casa, ve cómo un helicóptero aterriza en una de las esquinas de su terreno de 11 hectáreas, ubicado a cinco kilómetros de la plaza de Yapacaní.

En la aeronave llega el viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres; Nicolaus Hansmann, agregado de la Unión Europea en Bolivia y el director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), Mario Centellas.

La actividad inicia minutos antes. Tomás ve llegar a autoridades policiales y políticas, acomodar tiendas de campaña para que el sol no picase a los invitados y ordenar más de una decena de sillas blancas a una cierta distancia de cuatro piedras y cinco ollas de barro, con una cinta tricolor en el cuello.

Un grupo de efectivos de la FELCN está en perfecto orden, listo para empezar el acto. En la otra esquina del terreno, que queda sobre la carretera a Cochabamba, un medio millar de personas se dispone a ingresar por la fuerza. Freddy Machaca los dirige.

A Tomás nadie le pidió permiso para ingresar a sus tierras, tampoco para construir un cuartel o una feria productiva. La mala suerte y la burocracia estatal se le cruzaron en el camino a este agricultor que vive en el lugar desde 1980. Sus padres le dejaron a él y a sus tres hermanos una herencia. Una parcela de 30 hectáreas que fue dividida en cuatro pedazos. A Tomás le tocaron seis y con el tiempo se compró otras cinco, haciendo un total de 11 hectáreas.

El problema surgió cuando el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) llegó a Yapacaní a sanear las tierras y la parcela de los Cailo tenía cuatro dueños. “No pude hacer sanear mis 11 hectáreas. Me dijeron (los técnicos del INRA): ‘Nosotros no hemos venido a trabajar por pedacitos’. Todos los demás (vecinos) lo hicieron, menos yo”. Desde 2000 empezó su viacrucis.

Estaba en pleno papeleo con el INRA cuando el Gobierno le “echó el ojo” a su parcela para construir una base antidrogas. ¿Le pidieron permiso para ingresar y colocar la piedra fundamental? Tomás asegura que no, porque no pudo reunirse con ninguna autoridad del Estado.

### **Amenaza de muerte**

Tomás dice que en varias oportunidades personeros del Gobierno tomaron contacto con él para que accediera a vender al Estado cuatro hectáreas de tierra para la edificación del cuartel de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar). Cuando se acordó la fecha de la reunión en la sede de Gobierno, La Paz, para oficializar el negocio, no viajó.

¿Por qué? Su respuesta cae como un balde de agua fría. “El pueblo ha dicho que si yo aceptaba ese convenio, no contaría con mi vida”. Tomás relata que tres días

antes de viajar a La Paz, cerca de la medianoche, escuchó los bocinazos y ruido de motocicletas que estacionaban en el ingreso a su casa; cuando salió, vio a ocho mozalbetes que le traían un mensaje: “Si usted vende su terreno o si hace algún convenio, no cuente con su vida”.

La oposición a la construcción de la base se acrecentó y Tomás quedó entre dos bandos. La presión social lo obligó a comprometerse a donar tres hectáreas para que Yapacaní edifique su feria productiva. En ese ambiente es que los representantes de la Unión Europea, la Policía y el Gobierno se aprestaban a inaugurar el cuartel de Umopar. El discurso, el colocado de la piedra fundamental, el corte de cinta y la ch’alla no duraron ni 30 minutos. El helicóptero, echando polvo, se perdió en el aire llevándose a los invitados.

Inmediatamente se armó la trulla. Los enardecidos yapacanicenses, azuzados por sus dirigentes, lanzaron petardos, piedras y palos. La Policía gasificó y la prensa tuvo que ser evacuada.

Los que se oponían a la construcción de la base antidroga argumentaban que lo hacían porque los “leopardos” cometían abusos contra la población. En ese momento no les importaron las promesas del Gobierno de que así se acabaría con el narcotráfico y se reduciría la violencia, tampoco la inversión de 7,2 millones de bolivianos del Estado y de la Unión Europea. Se pusieron tercicos.

El entonces ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo que algunos dirigentes apadrinaban a los narcos; sin embargo, las movilizaciones le torcieron el brazo al Gobierno y esta obra cambió de lugar. El municipio de San Juan ofreció 34 hectáreas y cinco meses después, Jorge Pérez, ministro de Gobierno; Felipe Cáceres, viceministro de Defensa Social; Francisco García, representante de la Unión Europea y el jefe nacional de la FELCN, Mario Centellas, junto a autoridades políticas locales, inauguraron la construcción del cuartel de Umopar, con una inversión de 9,4 millones de bolivianos.

## Confesiones de un expeón del narcotráfico

Una gota de sudor surca su frente morena. Con una de sus manos callosas se saca la gorra e improvisa un abanico. El bochornoso clima norteño de más de 35 grados da para eso y más. “Qué calor”, dice José Antonio, nombre ficticio por petición de él mismo, como tratando de apaciguar los nervios.

José Antonio revela que ha sido un “mat’a” (persona que pica la coca) del narco y que esa actividad es cosa del pasado. Vive en la provincia Ichilo, y sus amigos, vecinos o compañeros de colegio están relacionados directa o indirectamente con el negocio del narcotráfico. Esa “movida” le es conocida.

- ¿Por qué nunca caen los ‘peces gordos’ en los operativos policiales?
- Hay niveles y todos están muy bien organizados y pagados. Hay informantes en los lugares que usted menos se imagina.

Es un círculo que se extiende y acoraza comprando conciencias, reflexiona José Antonio. Tiene su propio lenguaje y organización. Nace con los cultivos ilegales de coca. Los cocaleros venden su producto a las “hormigas” o personas que trasiegan la hoja milenaria. Los mat’as convierten la coca en cocaína, con la ayuda de precursores químicos, y las “mulas” se encargan de hacerla llegar a su destino, dentro o fuera de Bolivia. Esa información coincide con los datos proporcionados por un funcionario municipal de la Alcaldía de Yapacaní y por un exfiscal de Chapare.

### **Las campanas suenan en todos lados**

En la provincia Ichilo, lugar donde se desarrolló durante tres meses esta investigación periodística, hay vigías en los lugares más insospechados. José Antonio explica que reciben los denominativos de guachimanes, guardias, informantes, soplones o campanas las personas que alertan a los narcos del desplazamiento de los “leopardos” (agentes antinarcóticos). También son los que delatan a los pobladores que no están de acuerdo con esta actividad ilícita.

Cuenta que tiene un pariente “campana”. Dice que por él sabe que los soplones están en todos lados, en los pueblos, en los puestos de control de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), merodeando por los alrededores de las bases de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) o de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC). La tajada que reciben es de acuerdo con el chivatazo. Va desde 200 hasta 300 bolivianos. Pero no solo es plata: también reciben motocicletas, vehículos de cuatro ruedas y teléfonos celulares.

“Si me ayudas honestamente, te quedas con el fierro”, es la promesa con la que caen los novatos, explica José. Con esas dádivas el narco ha extendido sus tentáculos. Lo que revela José Antonio tiene relación con lo sucedido con un dirigente de Yapacaní, que después de apalabrar una entrevista con nosotros, dio un paso atrás diciendo que había sido amenazado de muerte.

### **Ingresar al negocio**

No cualquiera ingresa al ruedo, tiene que pasar una prueba de confianza o ser sugerido por alguien. Los reclutados para elaborar el “producto blanco” son los que montan las fábricas y están bajo el mando de alguien que, a la vez, rinde cuentas a un jefe y este, por lo general, a la persona que deja el dinero y recoge los “ladrillos” de Ichilo. Según nuestro entrevistado, son dos los mayoristas o capos que se llevan la cocaína de esa provincia cruceña.

“Si entrás al negocio sabés que no tenés que abrir la boca y que tu tiempo ya no es tuyo, cualquier rato te pueden llamar. Tu vida depende de un teléfono. Es a perderse en el monte dos días o más, pero salís con plata”.

Explica que los que se internan lo hacen en los lugares más inhóspitos de la selva —mientras más inaccesibles, mejor—, así no los pillan.

— ¿Qué hacen o que hacía usted?—, pregunto a José Antonio.

— Remojar, remover y picar (con motores) la coca para pasársela al ‘químico’, que es el que la procesa (con cemento, agua, cal, gasolina, clorhidrato de sodio y coca picada) hasta que sale la cocaína. El químico es el que más gana, fácilmente en 24 horas se ‘embolsilla’ mil bolivianos.

— ¿Y los mat’as cuánto ganan?

— Como 400 bolivianos por día. Pero no todo es color de rosas. Si haces algo indebido, morís como un perro. Los jefes no se van a tentar el corazón para mandar a sus matones a que te silencien.

— ¿Sabe de alguien que haya muerto de esta forma?

— Sí, un amigo...bueno, no tan amigo. Estaba en el negocio, tenía plata para botar. Siempre era el que pagaba los tragos en los boliches cuando de repente apareció degollado en el kilómetro cerca de San Germán. Nunca se supo quién ni por qué. Está enterrado en el cementerio de San Carlos, en un nicho prestado, porque ningún familiar se acercó a reclamar su cuerpo.

— ¿Por qué cree que lo mataron?

— Tal vez habló demasiado o malgastó el dinero que le dieron.

— ¿Es fácil ingresar al “negocio”?

Antes de responder José Antonio arquea una ceja.

— Es fácil entrar, una vez te aceptan, es difícil salir. Ahora veo a colegiales, hombres y mujeres, que hacen de soplones. No creo que sean conscientes de lo que les espera.

## Ichilo, bajo el estigma del narcotráfico

En varias oportunidades el Gobierno ha calificado a la provincia Ichilo de ser zona roja del narcotráfico. Autoridades y dirigentes dicen que por unos pagan todos, que el estigma del narco impide ver la producción agrícola, ganadera y pesquera de la región.

En marzo de 2014, el entonces ministro de Gobierno, Carlos Romero, declaró que en Yapacaní había pobladores y dirigentes que protegían a narcotraficantes. Esta aseveración fue realizada justo cuando este municipio se opuso a la construcción de una base militar antidrogas.

Medio año después, Romero, en plena campaña para senador por el Movimiento Al Socialismo (MAS), se mantuvo firme en la misma posición. “Yo declaré que no solo Yapacaní, sino Santa Fe, Nuevo Horizonte, San Germán, Kilómetro 7 y Buenavista son municipios en los que se ha encontrado actividad de producción de droga y me ratifico en esa caracterización. Me ratifico en que no son municipios que están controlados por cárteles, sino que hay emisarios de cárteles. Hay laboratorios y fábricas móviles (de cocaína), eso sí existe, y existe también un cuartel de Umopar que funciona y trabaja”, sostuvo el entonces “hombre fuerte” del Gobierno del MAS.

Este calificativo no es bien recibido por el alcalde de Yapacaní, Senobio Meneses. La autoridad municipal cree que en las afirmaciones de Romero hay un trasfondo político y reta al Gobierno a controlar el trasiego de la hoja de coca. “Cuando a Yapacaní deje de ingresar coca de Chapare no va a existir más el narcotráfico. Es obligación del Estado controlar esto”, sostiene.

Otro que mantiene esta misma posición es Freddy Machaca, dirigente del Distrito 2 de Yapacaní. Compara al narcotráfico con una panadería. “Mientras haya harina va a haber pan y mientras haya coca va a haber cocaína; quien tiene que controlar esto es el Gobierno”, afirma.

El jefe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) de Santa Cruz, Alexander Rojas, y el viceministro de Sustancias Controladas, Felipe Cáceres, insisten en que es necesario diferenciar a la gente que se gana la vida de forma honesta de aquella que se beneficia del narcotráfico.

“Muchos pobladores son nuestros aliados, nos dan información, pero sabemos que en estos lugares también hay gente que está trabajando (con los narcos)”, dice Rojas. A diferencia de otros años donde los narcos emboscaban y asesinaban a policías, el jefe policial está seguro de que en la actualidad no hay en Bolivia ningún lugar impenetrable para la FELCN.

## **Las dos caras de Ichilo**

En Yapacaní, uno de los cuatro municipios de la provincia Ichilo, hay dos realidades: la que se maneja en los discursos oficiales y la que sucede diariamente. Allá hay muerte, violencia, cocales, fábricas de cocaína, miedo y silencio cómplice, pero Don Cuchillo está seguro de que son solo unos cuantos los “malos de la película” y que las consecuencias las paga un pueblo que la suda día a día para ganarse honestamente sus ingresos económicos.

El nombre real de Don Cuchillo es José Antonio Gonzales Acero, y es el representante del barrio 24 de Septiembre. Como él, las dirigentes de los barrios Villa Nueva y 6 de Agosto, Juana Medina y Verónica Chore, aceptaron hablar del problema del narcotráfico en Yapacaní.

Una de las esquinas de la plaza central de Yapacaní es el escenario de la reunión. Antes de empezar la entrevista ellos dejan en claro que en ese municipio no se apadrina al narcotráfico. Sobre la negativa a la construcción de la base antidroga, dicen que no fue por defender a este negocio ilegal.

En palabras de los dirigentes, lo que los llevó a oponerse a este proyecto gubernamental fue el miedo a los abusos de los efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), conocidos como “leopardos”.

Como ejemplo, citan un tiroteo en el barrio Villa Estudiante, en el que, a plena luz del día, los agentes antidrogas se agarraron a tiros con los narcos. “Supóngase que ahí haya habido un transeúnte, una bala perdida y lo matan”, dice José Antonio Gonzales que está seguro de que un cuartel cerca no es garantía para reducir la violencia y la producción de la cocaína.

Los dirigentes defienden a Yapacaní como un municipio de gente que se dedica a la agricultura, ganadería y piscicultura, pero que es mal visto por el narcotráfico, actividad ilícita a la que dicen que solo se dedican unos cuantos.

Para ellos el Gobierno se equivoca de lugar con la base antidroga, creen que debería estar instalada en el límite entre Cochabamba y Santa Cruz, en los pueblos de San Germán o Nuevo Horizonte, donde la FELCN ha descubierto la mayor cantidad de fábricas de cocaína.

El comandante de la Policía de Ichilo, Gualberto Dávila, tiene otra versión, dice que de los cuatro municipios de esa provincia, Yapacaní es el más violento. Es donde se reportan más casos de personas desaparecidas, hechos de sangre en altas horas de la noche y en caminos hacia las comunidades. “Los ajustes de cuentas son por problemas con el narcotráfico”, afirma.

### **El narco no quiere control en la zona**

Si Yapacaní logró que el Gobierno desistiera de construir el cuartel policial en ese municipio, su vecino San Juan se ofreció voluntario. La edificación de la primera fase ha comenzado en agosto. Para los opositores esta no fue una buena noticia y apuntaron a la persona que ofreció las 34 hectáreas, el alcalde Katsumi Bani.

Un pronunciamiento público, escrito en una página y firmado por cinco dirigentes, declara a Bani persona no grata y le pide al pueblo de Santa Fe levantarse en su contra, así como oponerse a la construcción de la base antidroga.

El alcalde de origen nipón dice que esta no es la única amenaza. Mediante un correo electrónico recibió una amenaza de muerte contra él y su familia. “Esto no nos hace retroceder, es una política de Estado y nos mantenemos firmes”, señala.

Es un convencido de que esta es una de las formas para combatir el narcotráfico. “En Ichilo no solo se produce cocaína, sino que se la cristaliza”, dice. “Que seamos tildados de ser una zona del narcotráfico, no es solo una preocupación sino una amenaza”.

## Delitos sin sanción

### BREVE GEOGRAFÍA DE LA TRATA EN BOLIVIA

Cada frontera tiene una “vocación” y cada región presenta vulnerabilidades particulares. La trata de personas en Bolivia es un circuito económico perverso que apenas se halla un escalón por debajo del narcotráfico, y que ya cuenta con mecanismos de funcionamiento sistematizado y recurrente en lugares determinados.

BORIS Miranda  
miranda.ivanbor@gmail.com

Periodista freelancer, docente e investigador especializado en temas de seguridad. Ganador del Premio Nacional de Periodismo Digital 2012, entre otras distinciones. Autor de dos libros de periodismo narrativo. Este reportaje se redactó en noviembre de 2014.



Existe un puente entre Beni con el norte de La Paz para la explotación sexual, mientras en las ciudades del Altiplano se busca mujeres para que sean trasladadas por la frontera con Perú. El tránsito hacia España y Estados Unidos es con fines de explotación laboral; a Brasil las llevan para forzarlas a trabajar en lenocinios ilegales. El narcotráfico se aprovecha de ellas en Riberalta y Guayaramerín, mientras que Santa Cruz tiene sus propios circuitos internos de movimiento de personas. Así, muy a grandes rasgos, funciona la trata de personas en Bolivia.

## Guayaramerín - Riberalta

En el eje Guayaramerín-Riberalta, junto a las comunidades y poblaciones aledañas, los tratantes toman ventaja de las familias en situación de violencia o de separación. La mayoría de los casos conocidos tiene ese factor común. Niñas y adolescentes (casi siempre buscan menores de edad) son separadas de sus hogares o inducidas a abandonarlos después que se verifica que la situación dentro de su unidad familiar es compleja.

Se trata de casos en los que las chicas sufren violaciones por parte de padres o hermanos, incluso a veces con la tolerancia o pasividad de las madres, o de casos de violencia familiar y violencia de género exacerbada. Frente a situaciones tan difíciles, las jóvenes tienen pocas opciones y muy pocos motivos para permanecer en sus hogares.

Son conocidos varios modelos de reclutamiento. En la mayoría de los casos no se apela a la fuerza ni al engaño, sino a la persuasión. Las pandillas juegan un rol importante porque se convierten en las nuevas familias de las chicas que van en proceso de abandono de sus hogares. Hay mujeres que antes también fueron víctimas de la trata que ahora se convierten en reclutadoras. Ellas aprovechan su cercanía con las colegialas y se acercan a las que consideran que pueden ser “reclutadas”. Y así replican la historia que ellas mismas vivieron años antes.

Los chicos de las pandillas ejercen el liderazgo en los grupos. La nueva “familia” tiene códigos. Todos consumen alcohol, fuman y usan sustancias controladas de baja calidad derivadas de los residuos de la pasta base. También sucede que para incluir a una chica como un miembro pleno de la banda, debe tener relaciones sexuales con algunos de los integrantes. Suena difícil de creer, pero el sistema ha funcionado así no pocas veces. Las mismas jóvenes que atravesaron por todo esto señalan después que las cosas marchan “casi sin darse cuenta” y que la necesidad de sentirse incluidas es muy fuerte para ellas.

Las pandillas tienen dos tipos de conexiones: con los lenocinios en territorio boliviano y con los narcotraficantes minoristas que mueven algunos kilos mensuales

por la frontera con Brasil. En uno de los casos detectados, la chica fue llevada al mundo de la prostitución porque su novio era hijo del dueño de una casa de explotación sexual. Allí conoció a otros tratantes que tenían contactos con lenocinios en poblaciones fronterizas con Brasil.

En otro caso, las chicas fueron entrenadas para transportar algunos gramos de cocaína o pasta base. Las convirtieron en tragonas para cargar los sobrecitos con una técnica que también se utiliza en Perú. Deben engullir uvas congeladas, así las bolsitas con la mercancía pasarán bien. Reciben un pago por aquella travesía solo si el producto llega a su destinatario sin problemas. Una de las chicas presenció un volteo mientras la llevaron a la frontera. Los jóvenes que la explotaban detuvieron a un vehículo que venía en dirección contraria y a fuerza de armas de fuego les voltearon la pasta base. Ella escuchó los disparos, pero no vio si alguien murió porque estaba tirada en el piso del auto, víctima del pánico.

Un caso investigado de cerca por la Policía de Riberalta quedó en la impunidad, el de una familia que se aprovechaba de las menores para realizar videos en los que mantienen relaciones sexuales. Ropa, fotografías y videos fueron encontrados por la Fiscalía y se abrió una causa en 2013. A pesar de ello, los responsables lograron escapar y ahora se encuentran en otra población en el Beni.

También hay reportes que hablan de un puente hacia el norte de La Paz, en especial en las zonas donde se realizan actividades de minería. Los buenos precios de los minerales de años anteriores multiplicaron la presencia de personas en campamentos donde se generó demanda de trabajadoras sexuales. Los tratantes no perdieron la oportunidad de sacar provecho de eso. Otra constatación a partir de este caso es que los flagelos ambientales como la minería ilegal se asocian y generan otras economías perversas como la trata y la explotación sexual comercial.

## El Alto

De acuerdo a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), a nivel nacional, en 2011 fueron reportados 205 casos de trata de personas; el año 2012 se registraron 319; y hasta junio de 2013 fueron reportados 288 casos. En ese periodo, de 812 situaciones de trata en total, al menos 300 se habrían perpetrado en El Alto.

El Alto presenta características ideales para la instalación u operación de redes de tratantes. Las familias alteñas tienen fuerte vocación por el trabajo informal, el comercio, y es frecuente el desplazamiento de los padres de familia a la ciudad de La Paz. Esto genera que niñas y adolescentes pasen gran parte del día sin el control de sus padres, en sus hogares, escuelas, colegios o en las calles.

Otro factor que incide en la vulnerabilidad de la ciudad es la inestabilidad económica y familiar, además del gran porcentaje de población que se encuentra en niveles socioeconómicos por debajo de la media nacional. Estas características influyen para que adolescentes y jóvenes, en especial mujeres, opten por buscar fuentes de ingresos antes de culminar estudios superiores e incluso sin concluir el nivel secundario de educación. Una investigación reciente (2014) del Centro de Estudios de Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) señala que la tasa de desempleo en jóvenes alteños y paceños es del 13,5% respecto a la tasa general que llega al 7,9%<sup>1</sup>.

El Alto, y en menor medida La Paz, tiene otra característica que la convierte en epicentro de la trata en Bolivia. Los circuitos internos y externos de este flagelo se mueven en su órbita. Eso significa que los tratantes que abastecen a las redes locales intradepartamentales operan en esta zona de la misma manera que las bandas que abastecen a núcleos urbanos en el exterior, como en Perú, Chile o Argentina.

En esta ciudad se registran (incluso se hibridan) dos tipos de trata de personas: con fines de explotación sexual y con fines de explotación laboral. Los circuitos de tratantes también operan de maneras distintas. En los últimos cuatro años se registraron casos de secuestros con traslado forzado, pero muchos más fueron los engaños a personas de sectores vulnerables a quienes se ofrece buenas remuneraciones económicas en ciudades del interior de Bolivia y en Argentina, Chile e incluso Brasil.

Los clanes de tratantes también tienen sus centros de operación en la urbe alteña. De hecho, en El Alto se aprovechan hoteles en barrios alejados y alojamientos clandestinos para mantener bajo cautiverio a las víctimas de secuestro antes de trasladarlas a sus destinos finales. En cuartos, las jóvenes permanecen dos o tres días y hasta una semana. Los grupos que trabajan con tratantes en el exterior tienen métodos de coerción para la pérdida de la voluntad que van desde periodos largos de hambre hasta intimidaciones verbales, psicológicas, físicas y sexuales. En el periodo que las adolescentes y jóvenes permanecen en estos verdaderos centros de reclusión clandestinos, los “niñeros” deben aplicar los métodos necesarios para que las secuestradas asimilen y acepten su nueva realidad, sea ésta la de trabajadora sexual o la de una empleada en algún taller. La trata es, por estos motivos, la nueva forma de esclavitud en el siglo XXI.

1 Ver [http://cedla.org/sites/default/files/EXPOSICION%20EMPLEO%20JUVENIL%20Preforo%202014\\_0.pdf](http://cedla.org/sites/default/files/EXPOSICION%20EMPLEO%20JUVENIL%20Preforo%202014_0.pdf)

A nivel de trata interna, según explica un informe de UNIFEM (Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer)<sup>2</sup> sobre esta problemática, existen casos vinculados a la decisión de las familias de enviar a sus hijos a la ciudad por las condiciones de pobreza en que viven. Creen que familiares, padrinos o madrinan los proporcionarán estudios y trabajo sin saber que pueden terminar siendo víctimas de violencia, maltrato, discriminación, explotación sexual comercial, trata, entre otros.

La necesidad de conseguir trabajo de parte de las niñas y adolescentes las lleva, en muchos casos, a ser víctimas de explotación sexual y comercial; son contactadas a través de intermediarios que les ofrecen trabajos de cocineras, empleadas, niñeras, les quitan los documentos si los tienen y les obligan a trabajar por alimentación y techo quedando atrapadas en condiciones de explotación.

La explotación sexual, sobre todo de mujeres, niños, niñas y adolescentes se da en el tramo etario de 12 a 30 años; las víctimas son explotadas en salas de masajes, lenocinios, whiskerías, hoteles, alojamientos e incluso al interior de vehículos (taxis) en calles, plazas de las ciudades de El Alto, La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, sin descontar nuevos puntos en poblaciones de los Yungas del departamento de La Paz.

## La Paz<sup>3</sup>

— ¿Al Barrio Gráfico?

— Suba. Primero la dejamos a la señora en Sopocachi y después la llevo.

Ella abordó un taxi plateado en el Multicine de la avenida Arce. Se sentó al lado de una señora de no más de 40 años. En el asiento del copiloto no iba nadie. Ni la mujer ni el conductor inspiraron ninguna clase de sospecha o desconfianza a esta ingeniera de 27 años.

El Toyota avanzó sobre la avenida Arce y sorteó minibuses y micros para comenzar a subir por la calle Belisario Salinas. Eran las tres de la tarde de un día soleado, pero el invierno paceño no daba tregua. Ella vestía una chompa de lana y una chamarra de mezclilla. Cruzaron la plaza Abaroa y, a la altura de la avenida Ecuador, giraron a la derecha.

Cuando el taxi llegó a la esquina de la Abdón Saavedra, sobre la calle Rosendo Gutiérrez, comenzó a acelerar. La otra pasajera parecía no tener intención alguna

2 Ver: <http://www.unifem.org.br/sites/800/824/00000509.pdf>

3 La versión original de este fragmento fue publicada en *Oxígeno* el 15 de septiembre de 2014.



por bajarse y abrazaba su cartera con fuerza. Después de que pasaron la avenida Luis Crespo, sacó una barra de metal.

El primer golpe fue en la rodilla derecha. Ella sintió que su pierna se había partido en dos por el dolor. De inmediato sintió otro impacto en el antebrazo. De nuevo la sensación de fractura. El taxista no bajaba la velocidad y maniobraba entre las calles despobladas de alto Sopocachi. Otro golpe, esta vez en la pierna izquierda. Ahora la señora apunta al pecho. Ambas manos reciben el castigo por tratar de cubrirse.

Detalles más precisos sobre ubicaciones y señas particulares de los tratantes no pueden divulgarse porque hay una denuncia en marcha. Los secuestradores tienen como hábito alquilar departamentos en zonas donde no hay mucho tráfico como alto Sopocachi o Llojeta. Los golpes no solo buscaban reducirla y evitar que escape, también eran el principio de una seguidilla de actos intimidatorios para reducir y, a la larga, anular la voluntad de la víctima.

Ya era de noche y ella permanecía amarrada a una silla con la luz apagada. Otra forma de doblegar el espíritu de las chicas que raptan es jugar durante más de 12 horas con la incertidumbre, desubicación y el hambre. En cierto momento, la muchacha logró dormir.

El negocio de la trata, el segundo acto ilícito más lucrativo del mundo después del narcotráfico, está segmentado y terciarizado. Lo mismo pasa con el comercio de droga y con el contrabando de animales y recursos naturales. Es capitalismo en alto estado de pureza. Hay dos modelos. El vinculado con el método del secuestro incluye cuatro grupos: los encargados de inteligencia y seguimiento, el grupo de choque que se ocupa del “levantamiento”, él o los niños que manejan las casas y, por último, los encargados de la entrega de las chicas a quienes administran los establecimientos de explotación sexual o laboral. Las organizaciones que se dedican al rapto de personas para después pedir un rescate funcionan con un esquema similar. Si hablamos de bandas grandes, como las que operan en Santa Cruz y, en menor medida, en La Paz, los miembros rasos de estas “secciones” del negocio casi no se conocen entre sí. De esta forma, cuando cae algún grupo, los demás están a salvo de delaciones.

El segundo sistema es el más común en el mundo de los tratantes. Es el método, por decirlo de alguna manera, no violento. Por lo general son mujeres (muchas de ellas víctimas de trata en el pasado) las que se encargan de la captación de niñas y jóvenes, otro grupo se ocupa del transporte y preparación, un tercer sector maneja las casas de seguridad y al final de la cadena aparecen los dueños de los “negocios”. En muchos casos pandillas locales son incluidas en el esquema. Se convierten en la nueva familia de las muchachas mientras son drogadas, intimidadas y violentadas

física, emocional y psicológicamente para aceptar su nueva vida. Toman ventaja de chicas en situaciones de desesperación económica o que provienen de familias destruidas. Hay niñas que terminan en manos de los tratantes por huir de las palizas o violaciones de sus propios padres y hermanos. El sistema funciona con igual efectividad en el campo o las ciudades.

La trata abastece a mercados de explotación laboral y sexual, sin embargo el modelo de negocio que existe permite que las economías perversas que coexisten en el país y en el continente se articulen y complementen. Los mismos grupos de tratantes están metidos en el reclutamiento de chicas para convertirlas en mulas o tragonas. También, en el resto del continente, son parte de la cadena de actores vinculados con el tráfico de órganos. En el norte amazónico boliviano secuestran mujeres de comunidades indígenas y poblaciones rurales con fines de explotación sexual en zonas de contrabando de minerales y madera. Como si de una casa de proveedores se tratara, se ha convertido en un negocio compartimentado y especializado. Son las nuevas reglas del juego.

A la mañana siguiente, con la espalda destruida y las piernas casi paralizadas por los golpes y las 16 horas que estuvo amarrada a una silla, montaron a la joven en otro vehículo. Los dos días siguientes los pasaría en Oruro. Las estrategias para quebrar su voluntad continuaron en ese tiempo con mayor intensidad. Así han doblegado a cientos o miles de muchachas. Algunos grupos de tratantes “culminan” su trabajo con la violación de las chicas, ya a esas alturas incapaces de ofrecer resistencia. Después las entregan a los administradores de los centros de explotación o las sacan del país. Ella se salvó. Unos vecinos la vieron desde la calle por la ventana, entendieron lo que pasaba y la ayudaron a escapar. Tuvo mucha suerte. En Bolivia se produce al menos un caso de trata por día. Dos terceras partes suceden en el departamento de La Paz. La inmensa mayoría de las víctimas son niñas, adolescentes y mujeres jóvenes. Casi ningún tratante ha sido condenado. A pesar de las nuevas leyes, menos del 1% de los casos denunciados en los últimos cinco años culminó en sentencia. El negocio de la trata, que genera más ganancias que la venta de armas, avanza viento en popa.

## El Sur

Villazón, Bermejo y Yacuiba son tres pasos fronterizos donde cada año quedan en evidencia las debilidades del control estatal para la salida ilegal de niños, niñas y adolescentes. Alrededor de 15.000 menores cruzan esa frontera al año sin la compañía de sus padres. En muchos casos van acompañados por familiares o personas cercanas y con los permisos correspondientes, sin embargo, también se registran casos de trata en los tres principales accesos del sur del país a territorio argentino.

Una investigación del diario *El Potosí* de 2009 señala que en los juzgados para menores de la región se pagaba una muy pequeña suma de dinero (cinco bolivianos) para que el mismo juez proporcione testigos falsos y otorgue los permisos de viaje requeridos en las terminales de buses y trancas fronterizas.

De hecho, una verificación de la Defensoría del Pueblo señala que más de dos terceras partes de niños entre 0 y 18 años cruzan la frontera a través de Bermejo, Yacuiba y Villazón. La proporción de menores que abandonan el país desde Cobija, Desaguadero o Puerto Suárez es mucho menor.

De nuevo, los niveles de pobreza, la inestabilidad de las familias y la falta de control, sobre todo en las áreas rurales, han convertido al sur del país en otro territorio donde la trata de menores y mujeres jóvenes ha proliferado desde principios de la década del noventa del siglo XX. La cercanía con Argentina ha producido que circuitos de tratantes engañen o “seduzcan” a sus víctimas para ir voluntariamente a emplearse al otro lado de la frontera. Lo que nunca se aclara en estos casos es que lo que les espera son los talleres o fábricas donde se sobreexplota a los trabajadores a niveles de esclavitud y semiesclavitud.



## Tráfico que continúa

### EL PATRIMONIO DEL PAÍS SALE POR LAS FRONTERAS

Pinturas, platería, cuadros, retablos, joyas, la mayoría de la época de la Colonia, fueron desapareciendo de las iglesias de Oruro, Potosí y La Paz principalmente, y con ellos, una parte de la historia del país. La falta de registros, la poca claridad sobre las instancias responsables de la custodia y una ley sin normativa, hacen que Bolivia siga siendo un destino interesante para el saqueo.

LUIS Fernando Cantoral  
benavifer@hotmail.com

Periodista especializado en temas económicos y con ambiciones investigativas en las áreas de seguridad y derechos humanos. En 2014 abordó el tema del patrimonio cultural eclesiástico por ser uno de los más saqueados en Bolivia.



Dos extraños ataviados con pasamontañas, y en complicidad de la noche de luna nueva, se aprestan a ingresar a una iglesia del área rural del país. Mientras uno hace de banquillo, el otro logra asirse de los barrotes de la ventana del templo para, acto seguido, ayudado por una pata de cabra, herramienta infaltable en este tipo de ilícitos, sacar de cuajo los barrotes de su base de barro y piedra.

Asistido por la oscuridad, uno de ellos ingresa al sacro salón. Es un recinto construido en el siglo XVI. Los gruesos muros de la construcción absorben cualquier ruido que se genere dentro por el trajinar del desconocido, quien saquillo en mano avanza hasta el altar mayor de la nave principal de la iglesia para tomar los mejores frutos del esfuerzo de la orfebrería y pintura colonial. Anillos, coronas, cestos y cuadros religiosos son extraídos de sus lugares para ser llevados con rumbo desconocido, y tal vez para perderse para siempre, a cambio de un prometedor dinero que recibirá por cumplir el “encargo” o como resultado de la fundición de las joyas.

Saciado en su ambición, el desconocido sale con seguridad por la gran puerta, sin temor y sin vergüenza, con solo jalar el pestillo de la chapa, donde espera su cómplice, para luego perderse entre las callejuelas del poblado, en la lontananza, con un rictus de satisfacción, provisto del valioso botín. Los custodios, autoridades locales o religiosas se percatarán del robo hasta salido el sol, cuando será demasiado tarde.

Este es un relato sobre los cientos de robos que han ocurrido y ocurren en el país contra el patrimonio eclesiástico y que afectan principalmente a las iglesias coloniales en los departamentos de La Paz, Oruro y Potosí. Pinturas, platería, joyas, esculturas, retablos, muebles y tejidos desaparecieron por cientos, según el registro de la Unidad de Patrimonio del Ministerio de Culturas, en los últimos 50 años de vida del país, de 1964 hasta agosto de 2014.

La investigadora de patrimonio cultural, Cristina Bubba, recuerda que por 1988, cuando en sus años mozos de investigadora frecuentaba la iglesia de Coroma, fue testigo de un robo con características similares.

“Hicimos traer a un cerrajero de Oruro para poner rejas en la puerta y las ventanas de la iglesia. El señor midió las rejas delante de toda la comunidad. En la noche hubo una fiesta y antes de que pongamos las rejas, robaron; alguien había escuchado sobre las rejas”, recordó Bubba. Cuando se realiza una fiesta en el pueblo “todos están distraídos, hay poca atención en la iglesia, hasta el cuidador está en la fiesta”.

Pese a los decretos y normas emitidos en años anteriores, y con la actual y nueva Ley 530 del Patrimonio Cultural Boliviano, de mayo de 2014, los saqueos al patrimonio eclesiástico siguen ocurriendo, en una vorágine con altas y bajas,

situación que aún no conmueve a las autoridades nacionales y eclesiásticas para que las decida a tomar las medidas necesarias y definitivas que paren o disminuyan de manera drástica los robos.

Templos como el de Laja, Copacabana, Guaqui, Calamarca, entre otros, en el departamento de La Paz, fueron saqueados en reiteradas ocasiones. En algunos casos porque no contaban con las medidas de seguridad necesaria –tenían como mayor protección un alambre para asegurar la puerta– y, en otros, pese a contar con cámaras de seguridad y alarmas.

## La seguridad, el talón de Aquiles

La seguridad es el talón de Aquiles de los templos católicos coloniales, principalmente los ubicados en el área rural. Esta situación es reconocida por la asesora jurídica de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), Susana Inch. La funcionaria atribuye esta debilidad a la falta de experiencia de la Iglesia en el tema.

“Se hace lo que se puede. Dentro del accionar propio de la Iglesia el tema de seguridad no es precisamente algo en el que pueda tener ni experiencia ni experticia”, señaló la jurista.

Inch dijo que la CEB planteó varias veces al Estado la necesidad de realizar de manera coordinada un sistema de inventario y seguridad para los bienes eclesiásticos, sin que se haya concretado hasta el momento. “Fue muy difícil el diálogo en este sentido, entre otras cosas, porque siempre estaba de por medio el tema del derecho propietario sobre los bienes”, indicó.

Señaló que al estar definido que el patrimonio religioso pertenece a la Iglesia, no significa que no deban tomarse acciones conjuntas con el Estado. “Esperamos poder coordinar con el Ministerio de Culturas para poder tomar acciones que permitan dar un mejor resguardo a los bienes, tener una custodia más adecuada de los mismos y hacer procesos de inventariación periódicos”, apuntó.

Cristina Bubba, investigadora de patrimonio cultural, con más de 20 años en el campo, al igual que otros especialistas, tiene una explicación para el descuido de las iglesias. Señaló que cada día hay menos curas en el área rural para atender los templos.

“Un cura atiende de cuatro a cinco iglesias del área rural, pero no está permanentemente en esas cinco iglesias, entonces eso suelta un poco los controles y la relación de la gente con los objetos y con la iglesia en sí, porque son templos cerrados, entonces vas a una iglesia donde no hay sacerdote, rezas porque quizá

la abre el cuidador pero no hay presencia constante ni del Estado ni de la Iglesia, aunque el Estado es el más ausente”, manifestó.

Milton Eyzaguirre, jefe de Extensión y Difusión Cultural del Museo Nacional de Etnografía y Folklore (MUSEF), testigo de la situación de las iglesias rurales por los constantes viajes que realiza, aseveró que “en muchos lugares las iglesias están cerradas con un candado y listo, en otros lugares he visto que las iglesias sólo están cerradas con un alambre y nada más”.

Ante el letargo de las autoridades, sobre quién debe hacerse cargo de la seguridad de las iglesias, los traficantes aprovechan para planificar robos y seguir saqueando. Si bien la ley define competencias para la custodia y el cuidado, aún estas normas no se concretan en la mayoría de los casos.

El Artículo 16 de la Ley 530 señala que “Las iglesias y congregaciones religiosas se constituyen en custodios del Patrimonio Cultural Mueble e Inmueble que forman parte de la tradición religiosa del pueblo boliviano, estando obligadas a su registro, protección, conservación y difusión con arreglo a lo dispuesto en la presente Ley”. Para concretar esto se requiere de la erogación de recursos que son insuficientes.

El inciso II del mismo artículo agrega que “El Estado Plurinacional de Bolivia generará las condiciones necesarias para la gestión de estos bienes culturales, apoyando en su registro, seguridad, conservación, protección, investigación, restauración, difusión y capacitación de recursos humanos”.

## Escasa coordinación en la Iglesia Católica

La jurista de la CEB aclaró que la Conferencia Episcopal, como instancia nacional de la Iglesia Católica, constituye la reunión de los obispos de Bolivia y “no hay un patrimonio cultural religioso que esté bajo tuición de la propia Conferencia Episcopal”. Señaló que “son las diócesis, arzobispados, obispados, prelaturas y vicariatos quienes en realidad tienen la presencia de patrimonio religioso cultural”.

Sin embargo admitió que pese a los robos frecuentes –suman 316 de 1964 a agosto de 2014– la CEB no cuenta con un registro de los bienes y un sistema que permita centralizar el reporte de los robos en los arzobispados.

“Se tiene un desafío de desarrollar un sistema interno de información (sobre los robos ocurridos) que permita coordinar el tema del inventario de bienes, poder trabajar en el tema de la valoración y custodia, además del resguardo correspondiente”, indicó.

La situación se tornó más dramática al constatar que en el Arzobispado de La Paz, que según Inch sí cuenta con un registro de los robos ocurridos, nadie pudo dar información al respecto. Una funcionaria de nombre Rocío, nada cortés por cierto, indicó que ellos son los que menos saben sobre el tema y que si alguien cuenta con la información es la CEB. “Acá no hay nadie que pueda dar esa información”, subrayó.

Para la jefa de la Unidad de Patrimonio del Ministerio de Culturas, Lupita Meneses, está muy claro quiénes tienen la responsabilidad de precautelar el patrimonio eclesiástico. “Las iglesias y los municipios también tienen que destinar recursos para el cuidado de este patrimonio que está a su cargo, está en la Ley de Autonomías y en la Ley de Descentralización”, remarcó.

Entre tanto, y hasta que se cumpla la ley, y se consoliden los recursos económicos de parte de los gobiernos subnacionales y la Iglesia, la amplia frontera de Bolivia sirve como filtro para la salida del patrimonio nacional.

## Débil control en puntos de salida

El comandante de la Unidad Policial de Apoyo al Control Migratorio (UPACOM), teniente coronel Sergio Bustillos, señaló que el personal con que cuenta es insuficiente para cubrir de manera adecuada los 19 puntos fronterizos, seis puntos intermedios y tres aeropuertos principales (La Paz, Cochabamba y Santa Cruz) del país.

El policía dejó en claro que la función de la UPACOM es solo velar por el flujo migratorio en los puntos mencionados, donde las personas deben cumplir con todos los requisitos de ley para ingresar o salir del país. Dijo que la salida o entrada de objetos está en manos de la Aduana. Reveló que en la frontera con el Perú existen al menos otros 15 puntos de tránsito no oficiales que carecen de control.

“Los puntos que están oficialmente declarados como fronterizos son en los que hay presencia del Estado. En la frontera con el Perú hay hasta 15 puestos que no están establecidos”, manifestó.

Según un reciente reporte de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), a pedido de esta investigación, en los últimos años esta entidad solo logró evitar la salida de un cuadro patrimonial que fue camuflado y envuelto en un edredón. Sin embargo, de acuerdo a los datos de la Unidad de Patrimonio del Ministerio de Culturas, solo en 2013 se sustrajeron 123 piezas del patrimonio eclesiástico, y hasta agosto de 2014, se mencionaron 10 piezas.

Milton Eyzaguirre expresó su preocupación por la gestión de la Aduana en este tema. Advirtió que no cuenta con el personal suficiente y calificado para controlar la

salida del patrimonio cultural por las vías legalmente establecidas. “Ni qué decir de los otros puntos no autorizados”, expresó.

“Las instituciones vinculadas con la Aduana cada vez menos convocan a especialistas, entonces me temo que está saliendo mucho material sin reconocimiento o como pieza actual o copia, y nadie le da ningún tipo de importancia”, indicó.

Recordó que años atrás, como funcionario del MUSEF, participaba en operativos, en las unidades de verificación, para realizar las revisiones respectivas, y encontraban piezas coloniales muy bien camufladas en vehículos de transporte. “Con la eliminación de las unidades de verificación por medio de un decreto supremo ya no existe más el mismo control”, lamentó.

Eyzaguirre sostuvo que hoy la Aduana está más vinculada al tema económico y “este tipo de patrimonio no le es de mucho interés. Puede que salgan las piezas de la forma más simple posible”, insistió. La presidenta de la Aduana Nacional de Bolivia, Marlene Ardaya, señaló que los funcionarios de esa entidad en aeropuertos, “solo actúan cuando detectan comportamiento sospechoso del viajero”.

Lupita Meneses reconoció que existe debilidad en la Policía y la Fiscalía para combatir este flagelo, porque “no tienen las condiciones suficientes como para poder llegar hasta el final en los procesos”. El tráfico de patrimonio cultural, junto a la trata y tráfico de personas, se ubica en el tercer lugar, a nivel mundial, de los negocios ilícitos más rentables después del tráfico de armas y el narcotráfico.

Meneses remarcó que esta titánica tarea no es solo responsabilidad del Ministerio de Culturas o de la Iglesia, sino que “todas las instituciones ligadas deben involucrarse”. “La Policía, la Aduana, la Fiscalía, la Procuraduría, las gobernaciones, los municipios; tienen que hacer una tarea interdisciplinaria e interinstitucional, comenzando desde el sistema educativo”, apuntó.

En marzo de 2008, tras culminar el Primer Seminario Taller Internacional para la Prevención y Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, una de las propuestas surgidas fue la creación de una fuerza especial de lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales en Bolivia, sin embargo aún no se concreta.

## **Bandas criminales**

El director de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) en el departamento de La Paz, coronel Walter Villamor, aseguró que hasta el momento no se detectó a ninguna banda internacional dedicada al tráfico de patrimonio que opere en el país. Indicó que se trata de organizaciones nacionales y algunos extranjeros que llegan al país de paso.

Señaló que Bolivia es centro de robo del patrimonio cultural eclesiástico y a la vez país de tránsito. Afirmó que los bienes salen principalmente a países europeos y a Estados Unidos, donde surgen los inescrupulosos compradores.

Según Villamor, una vez notificado del robo de un artículo patrimonial, por parte del Ministerio de Culturas o la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC), se activa la alerta en los 190 países miembros. Esta alerta busca que la mercancía no salga del país, o, en su defecto, si sale fuera, que sea recuperada.

De manera similar, Lupita Meneses subrayó que pese a los más de 300 robos sufridos en las iglesias “no hay datos suficientes para certificar que son bandas internacionales”.

“Sabemos que hay mafias internacionales que vienen por Perú, Bolivia, Brasil y Argentina, de paso, y van a Europa y Estados Unidos. Ahí es donde está nuestro patrimonio. Si uno entra a las subastas de Estados Unidos, Europa, Alemania, cada mes hay una y ahí está todo el patrimonio latinoamericano”, apuntó.

Por el modo de operar, señala la CEB, al parecer se trata de “organizaciones criminales muy bien conformadas”.

“Lo claro es que no son hechos ocasionales, sino que son bandas organizadas, pero no se cree que sea con fines de tráfico de patrimonio porque no hay ninguna evidencia que establezca que ha habido ese tráfico, más bien la evidencia apunta a pensar que se funden las joyas –que son los objetos que más se roban– para venderlas como metal”, apuntó.

La responsable jurídica de la CEB descartó que en estos robos estén involucrados funcionarios de las iglesias, como se afirmó o afirma de manera discreta, y a veces abierta, por algunas autoridades y entidades del Estado.

“No hay un resultado concreto que permita establecer hasta la fecha que algún sacerdote hubiera tenido algún grado de participación en esos hechos”, remarcó la funcionaria.

El 25 de abril de 2013, el presidente Evo Morales señaló a los obispos de la Iglesia Católica como responsables por la ola de robos perpetrados en los últimos meses en varios templos del país. Respecto al robo en la iglesia de Copacabana, en concreto, dijo que “quienes manejan las llaves son los obispos y ellos saben quién entra, quién sale”, por tanto “saben quién saca las joyas”.

## La cadena del delito

Dos entrevistados señalaron que estos bienes muchas veces, antes de ser vendidos, pasan por restauradores y anticuarios dentro del país. La investigadora

Cristina Bubba sostuvo que los anticuarios y los restauradores “son los que de alguna forma tienen relación” con el tráfico de patrimonio.

Recordó que en 1999, con la intervención a la casa de un diplomático peruano, que se conoció como el caso Díaz-Scobry, se recuperaron 269 piezas; días antes se corrió el rumor de que a la Embajada del Perú “llegaban cuadros”.

“De casualidad, en una reunión de museos, oí a una restauradora de arte decir que algo raro pasaba en la Embajada del Perú, que le llegaban cuadros, y que no digamos nada. Pero en una intervención la Policía incautó una gran cantidad de cuadros coloniales que eran sacados de Bolivia por vía terrestre”, apuntó.

Lupita Meneses agregó que “con seguridad debe haber este patrimonio en los anticuarios” porque no hay un control y registros sobre ellos. “Ni en la Alcaldía tienen registros de los anticuarios, de galerías de arte, donde puedan ser comercializados estos bienes”, manifestó.

Para Milton Eyzaguirre, la falta de control de las autoridades hace que el patrimonio cultural boliviano sea comercializado en conocidas calles de La Paz sin que se haga algo al respecto. “Sin ir muy lejos, uno va a la calle Sagárnaga y nadie hace el control, hay piezas prehispánicas ¿Quién hace el control?”, cuestionó.

## 2.053 piezas sustraídas en 316 robos

De acuerdo a datos proporcionados por la Dirección Jurídica del Ministerio de Culturas, de 1964 a agosto de 2014 ocurrieron 316 robos a centros eclesiásticos con una pérdida total de 2.053 piezas. En 1999 se registró la mayor cantidad de robos, 20 en total, con la sustracción de 83 piezas. Si bien en 2007 ocurrieron solo 8 robos, fue el año en que se sustrajeron la mayor cantidad de piezas: 208.

Lupita Meneses dijo que Bolivia, al ser un país muy rico en bienes patrimoniales, no es ajena a ser víctima de redes internacionales del tráfico ilícito que son abastecidas por bandas locales.

“En el Ministerio tenemos una cuantificación de robos denunciados desde 1964. Una de las épocas más duras de esto fue en 1999 cuando se sucedieron alrededor de 20 robos. A partir de ahí hubo una acción muy importante de parte de la Policía y la Fiscalía que interceptaron un caso de comercialización ilícita de bienes culturales, tanto boliviano como peruano, y donde se pudo tomar presas a varias personas que estaban implicadas; a partir de eso fue que disminuyó este saqueo a los bienes culturales”, apuntó.

Señaló que en 2013 sucedieron 15 robos a iglesias del área rural en los departamentos de La Paz, Potosí y Oruro, con un total de 123 piezas sustraídas. “Los bienes que son más susceptibles de robos son las pinturas, luego en gran medida la platería y las joyas, y también algunas esculturas. El interés del robo de estas obras es la comercialización”, remarcó.

Hasta agosto de 2014 se registraron dos robos: el primero fue en Jesús de Machaca, en la provincia Ingavi, y el segundo en la iglesia de Yotala, en el departamento de Chuquisaca. En ambos casos los ladrones sustrajeron artículos de plata.

Meneses precisó que los robos ocurren más en el área rural de los departamentos de La Paz, Oruro y Potosí, donde las iglesias están más alejadas, y los bienes culturales no tienen la seguridad necesaria. Agregó que también afectó el tema de la migración, que dejó a muchas poblaciones con pocos habitantes.

En los 50 años de registro de robos de casos denunciados, el Ministerio de Culturas contabilizó la pérdida de 795 cuadros de pintura colonial eclesiástica, 958 piezas de platería, 138 joyas, 85 esculturas, 34 retablos, 35 muebles y 8 tejidos.

Por esas denuncias actualmente hay 16 procesos judiciales y ninguna sentencia. La recuperación de los bienes hasta el momento llega a 120 piezas: 79 cuadros, 11 esculturas, 11 piezas de platería, 8 retablos y 11 marcos tallados.

La falta de registros y catalogación es una debilidad que deben afrontar las autoridades. Se estima que los artículos robados superan la cifra mencionada porque no se tiene un registro de todo el patrimonio cultural eclesiástico. Meneses mencionó que de 1975 a agosto de 2014 solo se logró registrar un 40%, como máximo, de todo el patrimonio cultural eclesiástico.

## Casos emblemáticos

Los casos emblemáticos son varios a decir de los entendidos. Susana Inch menciona uno que ocurrió en la Arquidiócesis de El Alto y La Paz con el robo a la iglesia de Copacabana. El lamentable hecho sucedió el 22 de abril de 2013.

Según la versión policial los ladrones cometieron el delito entre las 02.00 y 05.00 de la madrugada. Ingresaron por la parte posterior de la basílica y rompieron los vidrios de una ventana para llegar al camarín donde se hallaba la imagen de la Virgen. Se llevaron 27 piezas de su indumentaria.

Otro de los casos que conmocionó a los círculos de expertos en patrimonio fue la incautación, el año 1999, de 269 piezas patrimoniales en el departamento

del agregado cultural del Perú, Pedro Díaz, quien en complicidad con el francés Dominique Scobry, acopiaron las piezas con la intención de sacarlas del país para su comercialización.

Lupita Meneses indicó que en este caso se llegó a una sentencia de seis años de cárcel para el francés, quien luego de pasar un tiempo en prisión escapó.

“Nosotros verificamos toda la procedencia de estos bienes y gran parte no estaban catalogados, pero 12 cuadros coloniales pertenecían al patrimonio peruano y se devolvió; otro grupo de siete cuadros provenían de las iglesias de La Paz y Oruro”, indicó.

Para Milton Eyzaguirre, el tráfico de tejidos de Coroma a Canadá y Estados Unidos, en 1988, protagonizado por Roger Yorke fue uno de los hitos en la exportación ilícita de patrimonio cultural.

Yorke fue comprando piezas antiguas principalmente por el norte de Potosí. Detenido en Canadá, se le inició un juicio amparado en las normas internacionales que protegen el patrimonio cultural.

“Tuvo un final medio feliz porque se recuperaron 400 piezas de las 2.000 que sacó, a las otras les entró polilla. Son piezas en tejido. Esto ocurrió a raíz de la denuncia de la comunidad de Coroma. Ellos decían que sus ancestros vivían en sus tejidos y es por eso que pedían la devolución”, recordó el especialista.

Yorke fue declarado culpable de haber introducido ilegalmente bienes culturales en Canadá y fue condenado a pagar 10.000 dólares canadienses, y a dos años de libertad condicional. La apelación presentada contra esta decisión fue rechazada.

## Carencia de registros

La carencia de registros es una gran debilidad que permite en gran medida la pérdida de material patrimonial eclesiástico. La asesora jurídica de la CEB señaló que si bien existe un inventario, no es propio de la Iglesia porque se requiere cierta experticia con la que no cuentan.

“Se necesita no solamente gente entendida en el valor cultural, sino joyeros, gente que conoce el valor; el Ministerio de Culturas lo tiene, realiza inventarios periódicos y la Iglesia ha facilitado estas valoraciones”, dijo.

Cristina Bubba criticó que si bien el Ministerio de Culturas cuenta con un registro parcial, este no es distribuido entre los municipios, las gobernaciones y las iglesias, para que conozcan y controlen las piezas en su haber.

Desde 1975, con la creación del Instituto Boliviano de Cultura, entró en vigencia un centro de catalogación y documentación, señala Lupita Meneses. “Desde esa época se comenzaron a hacer los registros, los inventarios, la catalogación, especialmente en esta área de bienes culturales eclesiásticos”.

A partir de esa fecha las autoridades del sector fueron optimizando sistemas informáticos para registrar los bienes más susceptibles de robo como las pinturas, esculturas y platerías. Meneses precisó que aproximadamente un 40% del patrimonio histórico eclesiástico fue registrado.

Anunció que muy pronto entrará en vigencia un nuevo sistema de registro del patrimonio cultural, material e inmaterial, a nivel nacional, que permitirá a las gobernaciones y a los municipios acceder a los registros e incluir los suyos.

“Como Ministerio de Culturas estamos elaborando este instrumento metodológico para su implementación a nivel nacional a través de las gobernaciones y municipios, para que a partir del trabajo que hemos realizado pueda ir cada región haciendo sus propios inventarios y sus propios registros en línea”, manifestó.

Meneses agregó que las gobernaciones y los municipios deberán incluir en su Plan Operativo Anual (POA) el presupuesto para el registro de los bienes de las iglesias y los sitios arqueológicos.

## La “descolonización” afecta al patrimonio

El llamado proceso de descolonización que impulsa el Gobierno es otro factor que afecta al patrimonio cultural eclesiástico a decir de los entendidos. Milton Eyzaguirre indicó que con estas ideas los templos van siendo postergados de forma paulatina bajo el discurso de que “la colonización hizo mucho daño”.

“Están tratando de eliminar las influencias extranjeras católicas y por eso no le están dando importancia; por ejemplo, estábamos enterados que iban a derrumbar la iglesia de Achacachi e iban a construir otra nueva, entonces todo ese material que forma parte de lo colonial se iba a destruir. Evidentemente lo colonial nos ha hecho mucho daño pero forma parte de nuestro pasado, aunque no queramos reconocerlo está ahí presente”, manifestó.

Muestra de la aplicación de esta corriente es que en algunos lugares están cerrando las iglesias, dijo. Agregó que esta situación se evidencia en las iglesias coloniales de Caquiaviri y Carabuco, en el departamento de La Paz, y en Pampa Aullagas y Carangas, en el departamento de Oruro, donde “existe un gran descuido de los templos”.

Para la investigadora Cristina Bubba esta situación trató de afectar a la Iglesia porque surgió un rumor de que el patrimonio histórico y el patrimonio artístico no deberían estar considerados en la categoría de la ley “por la idea que se tiene de la descolonización”, sin embargo llegaron a entrar en la Ley 530.

“Hay algunas personas que piensan que este patrimonio es producto de la invasión y, por tanto, tiene un tinte ideológico de colonización que recuerda a la colonia, a la invasión, que recuerda a ese momento de shock cultural. Hay tendencias, pero todavía esas tendencias no han llegado a ser tan fuertes para que vayan en desmedro de la conservación de patrimonio. Son voces que se oyen pero no como políticas todavía”, indicó.

## Falta de coherencia

Pese a que Bolivia ya cuenta con una ley que define qué es patrimonio, existe una “falta de respeto” al mismo de parte de las autoridades, sostuvo Bubba. La investigadora indicó que por una parte el Gobierno dice defender el patrimonio cultural y por otra parte lo destruye. Advierte una contradicción en el discurso gubernamental.

“Han tumbado el edificio detrás del Palacio de Gobierno (casa Alencastre), pero la Ley del Patrimonio 530 y otras de antes dicen que es prohibido destruir bienes que son patrimonio cultural”, lamentó.

“El Palacio de Gobierno es patrimonio, el Legislativo es patrimonio, pero destruyes una casa patrimonial al lado para construir un edificio de 22 pisos y hacer la Casa del Pueblo, donde habrá una pista para un helicóptero; entonces esas cosas reflejan cuál es la idea del Estado con relación al patrimonio. Yo no sé si les interesa mucho”, expresó.

El director del Museo San Francisco, José Luis Ríos, también protestó por la forma “inconsecuente” y “alejada de la ley” del actuar del Gobierno. Dijo que es difícil que la gente aprecie y quiera su patrimonio si es que los llamados a hacerlo respetar son los primeros en quebrantar la norma.

“Hemos visto cómo hace poco se ha destruido la casa Alencastre y pese a que hace corto tiempo se ha promulgado la Ley del Patrimonio. Si las autoridades no nos dan el ejemplo obviamente los ciudadanos no crean esa conciencia. En muchas cosas el mal ejemplo es el que cunde (...) en Bolivia en general aún no hay una alta conciencia para cumplir las leyes”, reprochó.

Bubba agregó que si bien ahora se destina mucho más dinero que antes a las instancias que tienen que ver con el patrimonio, “se invierte más en arte, promoción

de llegada de cantantes de afuera, apoyo a películas”, y no de forma efectiva para el cuidado y conservación del patrimonio cultural.

## La norma es amplia y tiene vacíos

El 23 de mayo el Gobierno promulgó la Ley 530 del Patrimonio Cultural Boliviano. La Ley busca precautelar el patrimonio cultural e iniciar un proceso de registro de los bienes, sin embargo presenta algunos vacíos legales que pueden ser aprovechados por los traficantes del patrimonio cultural, advirtió Cristina Bubba.

“La nueva Constitución Política del Estado no prohíbe la exportación del patrimonio, y pensamos que esta carencia iba a ser cubierta por la nueva Ley 530 de Patrimonio. Antes de esta ley nos hemos basado en el Decreto Supremo 05918 de noviembre de 1961 que habla de las prohibiciones de exportación de todas las categorías de patrimonio tangible”, indicó.

Si bien la Ley 530, agregó Bubba, habla de la prohibición de la exportación ilegal del patrimonio cultural, esta medida solo alcanza al patrimonio arqueológico, paleontológico y subacuático, y deja desprotegido al patrimonio eclesiástico.

“Desde mayo de este año, por primera vez en la historia de Bolivia, en lugar de poner medidas más fuertes ante el saqueo que es constante, lo que hace la nueva Ley de Patrimonio es abrir una puerta a la exportación ilícita del patrimonio cultural”, advirtió. La investigadora espera que la reglamentación de la Ley cubra este vacío.

Otro problema que identifica Bubba es que la Ley 530 no define el año de referencia para que un bien sea considerado patrimonio cultural. Indicó que el Decreto Supremo 05918 era claro al respecto. “La anterior norma decía que los muebles, edificios, anteriores a 1900 no se pueden destruir ni exportar, 1900 era la fecha, la nueva Ley no tiene fecha, entonces no tenemos un referente”.

La nueva Ley de Patrimonio tampoco tiene definidas las funciones de los gobiernos municipales, departamentales y autonomías indígenas con relación a la custodia del patrimonio cultural, a pesar de que la Constitución Política del Estado y la Ley de Autonomías las define.

“Imagino que eso se va a reglamentar y van a ser los gobiernos autónomos los que de alguna forma van a tener más responsabilidad con la custodia del patrimonio cultural, pero la única forma de cuidar ese patrimonio es teniendo un inventario del patrimonio, por eso me imagino también que este inventario centralizado que tiene el Estado, completo o no, tendrá que ser descentralizado a estos lugares, con participación de la iglesia además, aunque en muchos templos ya no hay nada”, expresó.

Además de la normativa nacional, el patrimonio cultural se encuentra protegido por leyes internacionales como la Convención de la Unesco de 1970, el Convenio de Unidroit de 1995 y la Decisión 588 que se enmarca en la Comunidad Andina (CAN). Estos mecanismos posibilitaron que Bolivia recupere algunas piezas robadas que fueron identificadas en el extranjero. Bolivia, como firmante de estos acuerdos, amplía su radio de acción para proteger su patrimonio, sin embargo esta situación está enmarcada en el aspecto legal y formal y funciona de manera efectiva si los bienes patrimoniales del país fueron registrados con anticipación.

Mientras Bolivia no termine de inventariar y catalogar todo su patrimonio, seguirá expuesta a robos y saqueos. En tanto, las bandas del tráfico de patrimonio seguirán poniendo su mirada sobre Bolivia, como un destino de fácil acceso, ya que la ausencia de registros, en algunos casos la falta de voluntad política de las autoridades, el frágil control en las fronteras y la poca valorización de la cultura, son condiciones que facilitan para que el patrimonio del país se escurra por sus fronteras.



## La volcada del Tancara, el Ch'ila Tigre, el Lucifer y el Pilas MUERTE EN EL ABRA

La tradicional fiesta de Urcupiñita en el penal de máxima seguridad de Cochabamba, concluyó con una tragedia que aún continúa en la memoria de los reclusos y sus familiares. El hecho mostró, una vez más, que la “puesta en orden” al interior de los penales, está en las manos de los propios reclusos.

ZULMA Camacho Guzmán  
zcamacho@opinion.com.bo

Periodista del diario *Opinión* de Cochabamba (2010-2015). Premio Nacional de Periodismo 2013 en la categoría Medio Ambiente otorgado por la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), por el reportaje “Ritos ancestrales aniquilan la fauna silvestre”. Premio Biodiversidad 2013 de Conservación Internacional y la Fundación “Estás Vivo”. Este reportaje fue escrito y publicado en septiembre de 2014.



Una “habitual fiesta” en el penal de máxima seguridad de El Abra de Cochabamba terminó, el domingo 14 de septiembre de 2014, con una balacera que acabó con la vida de cuatro reos, un bebé de 20 semanas de gestación y 11 personas gravemente heridas.

Como ya era costumbre, la población penitenciaria se alistaba para celebrar la fiesta de Urcupiñita. Mientras tanto, otro grupo preparaba lo que entre los reclusos se conoce como “la volcada”, un plan en el que “se baja la cabeza de los que joden”.

Una misa a las 10.00 de la mañana dio inicio a los festejos. Mariachis, una banda de música y una orquesta tropical fueron los encargados de destapar la alegría en el recinto. Pero, además, cerveza y chicha, entre otras bebidas, se comercializaron en el lugar.

“Había permiso”, informó el director de Régimen Penitenciario, Dennis Mejía, al aclarar que solo se autorizó la fiesta pero no el ingreso y consumo de bebidas alcohólicas.

El baile, del que también participaron las visitas de los reclusos, mujeres y niños, se instaló en el patio del penal. Los delegados eran los anfitriones de la fiesta y fue al promediar las 22.00 del domingo que los alegres pasos de Gustavo Tovar, alias El Pilas, fueron interrumpidos por un disparo. “Le dispararon en su cuello y cayó”, contó un testigo.

“Ingresaron encapuchados de afuera, le dispararon al Tancara —Édgar Tancara— y a su novia Romina Y.M. cuando estaban bailando y luego se cortó la luz”, relató otro testigo.

Los visitantes que presenciaron el crimen vieron cómo estos encapuchados se acercaron a El Tancara que estaba tendido en el suelo y “lo remataron” con cuatro disparos más. El cuerpo de este delegado amaneció en medio del patio con una llave incrustada en el orificio del proyectil de su estómago y con galletas en su boca; para algunos fue una brujería de los autores a fin de no ser delatados.

El pánico cundió y la gente empezó a correr para todo lado. “Yo me fui con mi hijito a la capilla, y desde ahí solo escuchamos los disparos y las ráfagas”, relató una mujer que participó de la fiesta y prefirió mantener en reserva su identidad.

En las afueras del penal, otro grupo de visitas, que se disponía a regresar a sus casas, también fue sorprendido por los disparos. “En la primera ráfaga escapamos, pero luego un hombre encapuchado salió de allá —una de las calles al norte— y vino disparando”, afirmaron familiares de reos al señalar que se metieron apresurados a una casa vecina.

El tiempo transcurrió y después de la medianoche no se oyeron más disparos. Sin embargo, al interior del penal una pelea campal con palos y bates de beisbol continuaba. “Todo estaba dirigido, solo mataron a tres de los seis delegados y a su disciplina”, relató un exrecluso.

Los delegados a los que el exrecluso hizo referencia son: Édgar Ariel Tancara Sandagorda, alias El Tancara; Humberto Gonzales Olmedo, alias El Ch’ila Tigre; Gustavo Tovar Ramírez, alias El Pilas y Sergio Arze Aranibar, alias El Lucifer. Y quedaron gravemente heridos Aníbal Camacho; Jeyson Angulo, alias El Jason; Iván Castro, alias El Iván; Rafael Herrera, alias El Chavo; y Juan Carlos de la Vega, alias El De la Vega. También otros líderes: Omar Espinoza y Omar Gonzáles.

La alerta movilizó a los policías desde las 22.00. Varios grupos del Comando Departamental resguardaron el recinto desde afuera. “No ingresamos porque no habían las garantías necesarias”, indicó el director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC), Remmy Ampuero. La energía eléctrica no se repuso toda la noche. Finalmente, a las 8.15 del lunes 15 de septiembre un grupo de policías armados ingresó reduciendo a los internos y desalojaron las celdas para reunir a todos en el patio.

Fue a partir de las 10.30 que los primeros heridos fueron evacuados al hospital Viedma y otros al centro Salomón Klein de Sacaba, y cerca al mediodía se retiró a niños, mujeres y otras visitas que habían permanecido durante toda la noche refugiados en la capilla del penal y en las celdas.

Hasta el amanecer, los internos caminaban por el patio, algunos rodeando a los cadáveres y otros al interior de sus celdas.

Mientras tanto, en las puertas de El Abra, familiares llegaban por decenas. Desgarradoras escenas de llanto y desesperación traían a la mente los trágicos momentos de la matanza en el penal de Palmasola, Santa Cruz, cuando una balacera seguida de un incendio dio fin con la vida de 34 reos y un niño. Desde la mañana y hasta el mediodía, varios grupos especializados ingresaron para atender a los heridos, realizar las requisas, secuestrar evidencias y controlar a la población penitenciaria.

## La fiesta de Urcupiñita

La fiesta de Urcupiñita es una de las actividades tradicionales en el penal de El Abra. Delegados del recinto obligan a los internos a organizarse para conformar grupos de bailarines para la entrada folclórica. En esta festividad, cada botella de bebida es comercializada entre 25 y 100 bolivianos. Los internos pagan entre 100 y 150 bolivianos para el alquiler de sus disfraces.

El día de los trágicos hechos, el delegado de este recinto, conocido como El Tancara, caminaba rodeado de siete u ocho guardaespaldas.

Ocho fraternidades fueron organizadas para la entrada de la festividad de Urcupiñita al interior del recinto: potolos, morenada, pujllay, salay, caporales, negritos, tinkus y tobas.

Asimismo, cuatro grupos de música amenizaron la fiesta; inicialmente un grupo de mariachi, luego una banda de músicos folclóricos, una orquesta de música tropical y finalmente una amplificación.

## Niños, armas y bebidas

En este penal de máxima seguridad, al igual que en todas las cárceles de Cochabamba, algunos niños conviven con sus padres junto a la población penitenciaria.

El día de la fiesta ingresaron al lugar bebidas y armas de fuego. Producto del operativo se hallaron al menos tres armas automáticas, un arma calibre 38 y otra calibre 9 milímetros. ¿Quiénes las tenían? Fuentes extraoficiales confirmaron que fueron halladas en pequeños habitáculos escondidos en la tierra, que llevaban, a su vez, a otros de mayor tamaño.

Uno de estos ambientes, donde fácilmente ingresaban tres personas, se encontraba bajo tierra y tenía las paredes de ladrillo y cemento con una cubierta metálica. Para no ser descubierto fue camuflado con tierra y con un vehículo en reparación ubicado encima.

Otros habitáculos guardaban en su interior cajas de costosas bebidas como whisky y ron de marca; también se encontró droga y celulares de alta tecnología — S4 y S5—, además de armas blancas. “Habían muchos lugares de tierra removida”, dijo una fuente.

## “Sigue vivo...”

Jhonny Villarroel es uno de los heridos más graves de la balacera; llegó al hospital con cinco disparos. “Él tiene un disparo en la cabeza, cuatro en el estómago y sigue vivo”, relata uno de los familiares que aguardaba en puertas del hospital Viedma.

Al igual que Jhonny, diez personas más presentaban graves heridas provocadas por armas de fuego y arma blanca, que comprometían sus vidas.

Una de las primeras personas en ser intervenida quirúrgicamente fue Margarita Herrera de 29 años, quien vendía comida en la pensión del penal y estaba con 20 semanas de embarazo. El proyectil que recibió en el vientre se quedó alojado en el pecho de su bebé.

Junto a ella ingresó Romina Y.M., de 26 años de edad, la pareja de El Tancara que recibió los disparos de bala mientras bailaba en el patio junto a su novio.

Testigos oculares cuentan que mientras ella se desangraba, tres encapuchados se acercaron a El Tancara gritándole: “Esto es para ti Tancara”, le cortaron el cuello y le dispararon al menos cinco veces más.

Según el relato del representante del Defensor del Pueblo en Cochabamba, Marco Andrés Cuevas, los cuerpos de las víctimas y de los heridos fueron hallados por todo lado.

El diagnóstico médico de los heridos señalaba que Rolando Vargas Fernández, quien no tenía familiares en Cochabamba, solo en Yacuiba, presentaba una herida de cuchillo en la espalda; Lindomar Bejarano Durán fue herido por un arma de fuego en el muslo; Severino Galarza Ganes presentaba una herida de bala en la columna y Félix Ramos Condori, una bala en el estómago.

Javier Vargas es otro de los reclusos con múltiples disparos en la espalda. Finalmente, Ariel Marza Choque tenía una herida de arma de fuego.

Familiares de una de las víctimas intentaron trasladarlo a otro centro hospitalario, sin embargo todo trámite con la gobernación de El Abra fue suspendido, ya que la autoridad se encontraba en reuniones con sus superiores.

El entonces ministro de Gobierno, Jorge Pérez, visitó a los heridos e hizo un recorrido por el hospital Viedma. Asimismo, se trasladó hasta la morgue para confirmar el fallecimiento de los cuatro reos y el bebé.

## Pugnas entre delegados y extranjeros

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), Remmy Ampuero, informó que no se descartó ninguna de las hipótesis para encontrar a los autores de la balacera, que la noche del domingo 14 de septiembre de 2014 acabó con la vida de cuatro delegados internos y un bebé de 20 semanas de gestación.

Una de las hipótesis giró en torno a la pugna de poder entre delegados de este recinto carcelario, y la otra identificó una revancha originada por reclusos extranjeros, entre ellos colombianos, peruanos y chilenos.

Sin embargo, familiares de las víctimas e internos del penal se inclinaron más por la primera hipótesis.

“Es que hay mucha comidita —dinero fácil—”, dijo uno de los exreclusos al señalar que los delegados son los encargados de cobrar el “derecho de vida” a todas las personas que ingresan a este penal.

Este derecho de piso oscila entre 3.000 y 7.000 dólares, sin embargo hay quienes señalan que excepcionalmente y a mucha súplica se aceptó, en algunos casos, el pago de 2.000 bolivianos.

“Hay que rogarles como a Dios para que nos den tiempo”, indicó la hija de uno de los internos al denunciar que durante el mes que demoraron en reunir el dinero, su padre era torturado con una bolsa plástica en la cabeza, mientras los delegados de disciplina lo apaleaban hasta romper listones de madera en su cuerpo.

Además del dinero, están los ingresos generados por la venta de drogas como cocaína y marihuana, también de bebidas alcohólicas que, según los reclusos, “siempre han estado disponibles en este penal”.

Las fiestas, los lujos, las mujeres, la buena comida y bebida son parte de los beneficios de ser un delegado.

Por otro lado, queda como antecedente que El Tancara fue el principal cabecilla del plan que derrocó al antiguo régimen de reclusos liderado por Ronald Alcaraz, quien fue hallado en su celda luego de ser sedado y asesinado.

Mientras tanto, la incertidumbre permanecía en el penal al no saber quién será el sucesor de El Tancara. “Él era el único que puso orden, con otros por ahí va a ser más jodido”, dijo la hermana de un interno.

En los últimos años, la seguridad en Bolivia acapara cada vez más los titulares de la prensa nacional, mostrando sin embargo una importante carencia: la falta de cifras y datos concretos y la escasa profundización en torno a los hechos noticiosos

Las siete crónicas que aquí presentamos son resultado de los talleres de reflexión y entrenamiento en torno al tema que tuvieron lugar en 2014, por iniciativa de la Friedrich Ebert Stiftung y la Fundación para el Periodismo, y que buscaron mostrar, en primer lugar, que el periodismo de investigación en temas de crimen y delito es una rama con características únicas, especialmente en lo que a la seguridad del periodista se refiere.

Estas crónicas tocan la situación en las cárceles del país, la actividad del narcotráfico en Bolivia a través de cárteles mexicanos y poblaciones involucradas en él, la trata de personas y el contrabando de nuestro patrimonio cultural.

---



La Fundación para el Periodismo (FPP) es una institución sin fines de lucro, creada por la Asociación de Periodistas de La Paz y la Asociación Nacional de la Prensa, con el objetivo de mejorar la calidad del periodismo boliviano a través de la formación continua de periodistas y otros profesionales que desean incursionar en esta actividad. La FPP desarrolla, además, cursos, seminarios, paneles, mesas redondas y talleres para crear espacios de debate, análisis, discusión y reflexión de los problemas nacionales, sin compromisos ideológicos, políticos, raciales o religiosos.

[www.fundacionperiodismo.com](http://www.fundacionperiodismo.com)



La FES se estableció en Bolivia a finales de la década de 1970 como Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales – ILDIS. Desde entonces, contribuye activamente al fortalecimiento del desarrollo y la democracia, ofreciendo un espacio plural para que diversos actores políticos, sociales e institucionales puedan reflexionar en torno a los problemas más relevantes para el país, generando aportes para sustentar una cultura política que tienda a consolidar la democracia boliviana.

[www.fes-bolivia.org](http://www.fes-bolivia.org)

e mail: [info@fes-bol.org](mailto:info@fes-bol.org) Tel.: (591-2) 2750005 Fax: (591-2) 2750090, La Paz, Bolivia